

Notas sobre la formación y el desarrollo del movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi (provincia de Salta, Argentina)

José Daniel Benclowicz*

Objeto de estudio

El aumento de la desocupación a nivel mundial durante las últimas décadas ha provocado la disolución de marcos de referencia que resultaban centrales para muchos trabajadores, tendiendo en general a una creciente descolectivización de la sociedad (Castel, 1997). En la Argentina, como consecuencia de las políticas neoliberales instrumentadas por el gobierno de Carlos S. Menem y continuadas por su sucesor, Fernando de la Rúa, se produjo un vertiginoso crecimiento del desempleo, que no tiene precedentes en la historia del país. Sin embargo, la emergencia de un movimiento de trabajadores desocupados, como es el caso del movimiento piquetero, expresa una tendencia contraria a la disgregación social. Los piqueteros lograron redefinir en términos positivos su condición de desempleados, proyectándose al plano de la lucha colectiva y configurando nuevas identidades y agrupamientos. A partir de esa redefinición emergieron como actor social, ocupando en la actualidad un importante lugar en el terreno de la lucha de clases.

En este trabajo abordamos el estudio del movimiento de trabajadores desocupados o movimiento piquetero de Tartagal y General Mosconi, localidades ubicadas al norte de la provincia de Salta. En esa región resultó particularmente traumático el proceso de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que tenía una fuerte presencia en la zona. La venta de la empresa estatal provocó por un lado, una completa desestructuración económica y social, y por el otro, una profunda crisis de identidad en el seno de la clase obrera de la zona. Esta crisis se vio acentuada por la prescindencia del sindicato del sector, que tras una fugaz oposición colaboró abiertamente con la venta de YPF. En ese marco, algunos años después, los piqueteros protagonizaron importantes experiencias de lucha y de organización política y económica alternativas, probablemente las más radicalizadas desde el restablecimiento de la democracia en 1983. Dedicaremos especial atención al surgimiento y crecimiento de las agrupaciones piqueteras más destacadas de la zona por su extensión e influencia: la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) de Mosconi y a la CTD-PO (Coordinadora de Trabajadores Desocupados-Polo Obrero) de Tartagal.

Desde 1997 hasta la actualidad, los trabajadores desocupados organizaron diversas protestas, utilizando el corte de ruta y de acceso a las empresas petroleras como uno de sus principales métodos

de lucha. En numerosas oportunidades, los cortes fueron reprimidos por orden de las autoridades. En ese contexto, los piqueteros impulsaron y encabezaron formas de democracia directa que desplazaron al poder político local, transfiriendo el poder de decisión y acción a asambleas populares en las que participó el conjunto de la comunidad. Esas puebladas obligaron a los representantes del Estado a retirar a las fuerzas represivas y a acceder a buena parte de las demandas de los manifestantes. Como consecuencia de sus luchas, la UTD y la CTD-PO lograron controlar diversos recursos, a partir de los cuales implementaron distintas modalidades de autogestión. Por otra parte, las estructuras sindicales locales tradicionales se vieron avasalladas por las organizaciones piqueteras, que se convirtieron por momentos en el eje de referencia del conjunto de los trabajadores. Las experiencias de Tartagal y de Mosconi influyeron fuertemente en la conformación del movimiento piquetero en todo el país. La UTD de Mosconi terminó estructurándose como una organización autónoma, y se convirtió en una importante referencia de este tipo de organizaciones en todo el país (MTD Solano y Colectivo Situaciones, 2002). La CTD, por su parte, sirvió de experiencia inicial al Polo Obrero, organización piquetera de alcance nacional orientada por el Partido Obrero –de tendencia trotskista–.

Las cuestiones señaladas sugieren el desarrollo de una alternativa contra-hegemónica en la zona; en este sentido, creemos que el estudio de la emergencia y evolución del movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi contribuirá a la identificación de aportes y limitaciones de las organizaciones de trabajadores desocupados para la articulación de una alternativa política, económica y social al orden imperante.

Estado de la cuestión

La bibliografía sobre el movimiento piquetero es escasa y fragmentaria, lo que resulta lógico teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno reciente. Distintos aspectos de la experiencia desarrollada en Tartagal-Mosconi aparecen tratados en unos pocos trabajos específicos, (Aguilar y Vázquez, 1998 y 2000; Lapegna, 2000; Atschuler, 2001; Barbeta y Lapegna, 2001; Equipo de Educación Popular de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 2003; Benclowicz, 2004; Schaumberg, 2004; Sacchi, 2004; Korol, 2005) y en algunos libros que encaran la problemática desde una perspectiva general con algún tipo de base o referencia empírica (Oviedo, 2001; Kohan, 2002; López Echagüe, 2002; Svampa y Pereyra, 2003). A su vez, existen trabajos que abordan la cuestión piquetera desde una perspectiva general (entre los más interesantes se puede mencionar a los de Iñigo Carrera y Cotarelo, 2001a y 2001b; Dinerstein, 2001; Scribano y Schuster, 2001; Giarraca y Bidaseka, 2001; Schuster y Pereyra, 2001; Petras, 2001; Lenguita, 2001; Lucita, 2001; Maceira y Spatalberg, 2001; y Mazzeo, 2004). Otros analizan distintos casos dentro del movimiento de trabajadores desocupados que reflejan características y problemáticas comunes que merecen ser consideradas (los siguientes resultan particularmente sugerentes: Klachko, 1999; Auyero, 2002a y 2002b; MTD Solano y Colectivo Situaciones, 2002; Gómez y Kindgard, 2003; Ferrara, 2003; Massetti, 2004).

La cuestión de las causas de la protesta y de la emergencia del movimiento piquetero es abordada de distintas maneras. El peso de las transformaciones estructurales aparece invariablemente como un primer elemento a considerar. Ahora bien: algunos investigadores (Auyero 2002a y 2002b; y Svampa y Pereyra, 2003, entre otros) han destacado la necesidad de rechazar lo que E. P. Thompson (1995) designa como una “visión espasmódica de la historia popular”, según la cual los actores reaccionan mecánicamente ante un estímulo –la falta de trabajo–, de manera que el aumento del desempleo y la pobreza serían suficientes para explicar la irrupción de las protestas y de las agrupaciones piqueteras. En general, existe consenso en torno a la idea de que las transformaciones estructurales y la crisis social resultante son sólo la base del proceso, es decir que resultan condiciones necesarias aunque no suficientes para explicar las acciones de lucha y organización que sobrevienen. Lo que varía es la ponderación de los elementos que convergen con la “base objetiva”. Auyero, que

analiza el caso de Cutral-Co y Plaza Huincul¹ (2002a y 2002b) y de Corrientes (2002a), enfatiza la cuestión de la corrupción política y las historias personales de los protagonistas. Los trabajos de Lapegna (2000), Oviedo (2001) y Svampa y Pereyra (2003), subrayan el papel de las experiencias de lucha inmediatamente anteriores, que alimentarían las puebladas. Oviedo, además, indica la activa participación de distintos partidos de izquierda en los procesos de lucha.

Otro aspecto que tiene importantes implicancias teóricas, es el de la composición social del movimiento piquetero y el carácter de sus reclamos. La mayoría de los investigadores coinciden en identificarlo como un movimiento de trabajadores desocupados. En este sentido, Lenguita (2001) y Petras (2001), entre otros, advierten contra la aplicación del marco analítico provisto por las teorías de los nuevos movimientos sociales y de la acción colectiva² al caso de los cortes de ruta y del movimiento piquetero, teniendo en cuenta que si bien las formas, los escenarios y los protagonistas de las protestas cambiaron, los reclamos siguen asociados a la reproducción de los medios de vida. A pesar de eso, la utilización prudente de algunas categorías de ese marco han favorecido el estudio de las identidades emergentes, por ejemplo en el caso de Svampa y Pereyra. Sin embargo, si se piensa de manera automática al movimiento piquetero desde la teoría de los nuevos movimientos sociales, queda desdibujado u oculto el carácter de clase que parecen tener esas organizaciones.³ En este sentido, Maceira y Spalteberg (2001), señalan que las clases y las fracciones de clase no se definen sólo por su coyuntura, sino por su historicidad. Por otra parte, distintos autores –Oviedo (2001), Lenguita (2001), Lucita (2001), Maceira y Spatalberg (2001), Scribano y Schuster (2001), Petras (2001), Kohan (2002), Benclowicz (2004), entre otros– marcan la continuidad entre los piquetes de huelga y los cortes de ruta.

Las particularidades históricas de los distintos sectores del movimiento piquetero han sido analizadas por algunos investigadores. Svampa y Pereyra identifican dos grandes vertientes del movimiento piquetero. La primera es localizada en el interior del país, especialmente en Salta y Neuquén, y su emergencia es posterior al proceso de desestructuración social de la década del noventa. La segunda, en el Gran Buenos Aires, estaría vinculada a grupos sometidos al desempleo desde mediados de la década del setenta. Massetti (2004) adhiere a esta caracterización, pero la lleva a un extremo: según su planteo, se trata de actores sociales completamente distintos. Otro de los elementos que Svampa y Pereyra tienen en cuenta, es el rol central de YPF en el caso de la primer vertiente, que agrega a las diferencias antes mencionadas un fuerte componente identitario. La diversidad histórica, política e identitaria es reconocida por todos los autores; en esa línea, Svampa y Pereyra, Mazzeo, y Massetti adhieren a la fórmula del Colectivo Situaciones (MTD Solano y C. Situaciones, 2002), que designa a las agrupaciones piqueteras como un “movimiento de movimientos”. Esta diversidad también dio lugar a diferentes caracterizaciones de las corrientes piqueteras, según sus potencialidades para abrir una vía de cambio social. Svampa y Pereyra, por ejemplo, distinguen entre un sector “radical” –donde ubican tanto a la UTD de Mosconi como a la CTD-PO de Tartagal– y otro “dialoguista” teniendo en cuenta el nivel de enfrentamiento con el Estado y la orientación a la lucha; Ferrara (2004) y Mazzeo (2004) establecen las distinciones según criterios ideológicos, realzando a las agrupaciones autónomas y condenando al resto. En el caso de Tartagal-Mosconi, parecería que las diferencias político-ideológicas que existen entre la UTD y la CTD-PO no impiden que ambas agrupaciones puedan ser ubicadas dentro del sector “radical” (Benclowicz, 2004). Las prácticas de la CTD-PO casi no han sido estudiadas; Atchuler (2001), Svampa y Pereyra (2003), el Equipo de Educación Popular de la UPMPM (2003), Schaumberg (2004) y Sacchi (2004) han reflejado varias iniciativas de autogestión de la UTD, llegando a afirmar, como ya se mencionó, que la agrupación llegó a convertirse en una suerte de “municipio paralelo”; resulta necesario evaluar su evolución, sus limitaciones y potencialidades.

Con relación al problema de las identidades y subjetividades de los piqueteros, Aguilar y Vázquez (1998, 2000), Lapegna (2000), Barbeta y Lapegna (2001), Svampa y Perreyra (2003) y

Schaumberg (2004) y Sacchi (2004), entre otros, han analizado el impacto del quiebre del núcleo de relaciones sociales tras la privatización de YPF y la influencia de las luchas y de las experiencias de organización política y económica en el plano subjetivo, aunque no se ha avanzado demasiado en establecer las formas en que se manifiestan esas influencias.

La sociedad ypefeana

Las localidades de Tartagal y de General Mosconi pertenecen al departamento General San Martín, ubicado en la región norte de la provincia de Salta, en la frontera con Bolivia. Tartagal es su cabecera, y tiene 60.585 pobladores; General Mosconi cuenta con 19.811. De conjunto, ambas localidades concentran más de la mitad de los habitantes del departamento, que es el más poblado de la provincia luego de la capital.⁴ La principal vía de comunicación de la región es la ruta nacional n° 34. Recorriendo 60 km por ese camino desde Tartagal hacia el norte, se llega a Yacuiba, ciudad fronteriza del lado boliviano; Mosconi se encuentra nueve km al sur de Tartagal.

La abundancia del petróleo en la región y las potencialidades de la explotación forestal favorecieron tempranamente el desarrollo de una economía de enclave, caracterizada por importantes inyecciones de capital en ambas actividades –especialmente en la primera–, ninguna inversión importante en otros rubros⁵ y el consumo o transformación de los productos extraídos o semi-elaborados fuera de Tartagal y General Mosconi. Durante la primera presidencia de Perón, YPF, que era la empresa más grande del país, fue visualizada como un símbolo de independencia económica. A su vez, la política social del primer peronismo favoreció el apoyo de los trabajadores petroleros al desarrollo de la compañía; la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE), consiguió importantes aumentos de salarios y mejoras en las condiciones de trabajo. En ese contexto, la estructura económica de la zona reafirmó sus rasgos de desarrollo “desigual y combinado” (Trotsky: 1972), con la coexistencia de un núcleo de la clase obrera moderna y calificada en la rama del petróleo, un creciente sector público, sectores económicos tradicionales, y un régimen político a nivel provincial con características marcadamente oligárquicas. En torno a Mosconi se concentró la extracción y el procesamiento del petróleo, y el grueso de los trabajadores de YPF se instaló en ese poblado. Tartagal, por su parte, se fue desarrollando como un importante centro comercial y de servicios, vinculado al conjunto de actividades económicas que irradiaba YPF. A su vez, la empresa construyó un pueblo donde vivían los trabajadores más calificados y los directivos de YPF: Campamento Vespucio, a cinco kilómetros al oeste de Mosconi.

El carácter verticalmente integrado de YPF, que involucraba la exploración, perforación, explotación, el transporte y la comercialización de sus productos; los ingresos comparativamente altos de sus trabajadores; la obtención de una variada gama de ingresos indirectos característicos del Estado de bienestar inaugurado en ese período (seguro médico, jubilación, etc.); sumados a un importante conjunto de servicios sociales, recreativos y residenciales que la empresa desarrolló para su personal –y que se mantuvieron hasta la privatización– convirtieron a esa empresa en un importante multiplicador de las actividades económicas. La siguiente entrevista permite aproximarse a la extensión de la acción social desplegada por YPF: “Pregunta: ¿Cuáles eran los beneficios de los trabajadores de YPF? Respuesta: Tenían muchos beneficios... tenían asistencia médica, remedios gratis, un hospital muy moderno con toda la tecnología [...] te llevaban con transporte a la escuela primaria y secundaria... los llevaban gratis, tenían colectivo [...] no nos faltaba nada en las escuelas... P: ¿Y en eso YPF qué tenía que ver? R: YPF les regalaba la escuela, les ponía aire acondicionado, les ponía calefacción, les daba... nos daba los útiles, guardapolvos, nos regalaba, nos becaban... P: También me comentaron algo de una proveeduría que tenía YPF, ¿cómo funcionaba? R: La proveeduría era... vos ibas y YPF te daba un carnet para ropa y electrodomésticos especial, y el común era para sacar mercadería. Y te descontaban

pero YPF te vendía la mercadería a precio de costo”. (Entrevista del autor a referente de la UTD, ex trabajador de YPF e hijo de un trabajador de esa empresa, junio de 2005).

De ese modo, se produjo un destacado crecimiento del sector comercial y de servicios de la región, donde se volcaba buena parte de los ingresos de los trabajadores. A su vez, se desarrolló un fuerte sentido de pertenencia por parte de sus trabajadores, y de diferenciación con relación a los demás: “P: ¿Como veía el resto de los trabajadores a los ypefianos o eventualmente a los trabajadores de Agua y Energía? R: Muchas veces se debatió eso entre compañeros, parecían como la parte aristocrática del sector obrero, se los veía como privilegiados, a los que cobraban muy buenos sueldos, pero además también se... se notaba una cierta eh... tendencia de los propios compañeros ypefeanos a pensar que eran parte de una clase media...” (Entrevista del autor a José “Pepe” Barraza, dirigente de la CTD-PO y trabajador de la empresa de Energía, junio de 2005). Varias entrevistas realizadas y diversos investigadores (Aguilar y Vázquez, 2000; Barbeta y Lapegna, 2001; Svampa y Pereyra, 2003) señalan la marcada diferencia establecida entre los que pertenecían a YPF, autodenominados “ypefeanos” y los que no pertenecían a esa empresa, que veían a los primeros como ocupando un lugar destacado, de privilegio. Esa característica resulta importante para explicar la posterior influencia de los primeros sobre el conjunto de la comunidad. A su vez, los autores marcan la fragmentación interna entre los trabajadores calificados y los que no lo eran. Las propias condiciones de vida de los ypefeanos –y de otros trabajadores del Estado, como los empleados de la empresa de Energía– los distinguían claramente del resto de la clase obrera, que soportaba duras condiciones de vida: “Y... debo decir que no hay nada que envidiarle al convenio colectivo de YPF porque también Agua y Energía era una empresa del Estado que gozaba de uno de los convenios colectivos de trabajo mas importantes conquistado en el auge de la luchas obreras y... bueno, había muchas prerrogativas digamos en este convenio, un reconocimiento de un montón de cosas. P: ¿Los sueldos, cómo eran en esa época de Agua y Energía? R: No, eran muy importantes... digamos sería... dentro de... de un parámetro... Digamos en lo que se refería al costo de la canasta familiar cubría todas las necesidades. P: Y los del resto? R: No, el resto era insuficiente [...] ganaba apenas para... P: O sea que las que pagaban buenos sueldos... R: Eran las empresas del Estado [...] se notaba la diferencia entre los hijos de los trabajadores de estas empresas con el resto de la población...” (Entrevista del autor a Pepe Barraza, junio de 2005). Sin embargo, durante los últimos años se ha ido extendiendo a través de los medios de comunicación y también en algunos ámbitos académicos cierta idealización de la etapa previa a la privatización, que habría sido una época de bonanza para esos pueblos en su conjunto. La medición censal de las necesidades básicas insatisfechas correspondiente a los años 1980 y 1991 desmiente esa impresión:

Población con necesidades básicas insatisfechas en %

Año	Argentina	Salta	Dto.G.S.Martín	Tartagal	Mosconi
1980	24,4	42,8	58	52,9	43,5
1991	19,3	37	46,7	45	32,6

Fuente: Cuadro elaborado sobre la base de los Censos Nacionales de Población 1980 y 1991, del INDEC, Argentina.

Como se desprende del cuadro, el bienestar social en el marco del capitalismo previo al neoliberalismo no alcanzó a buena parte de la población de Salta, provincia que excedía –y excede– holgadamente la media nacional de NBI, llegando casi a duplicarla. Si atendemos a los datos correspondientes al Departamento de General San Martín, que es la región más rica en petróleo de Salta, surge que supera los ya elevados índices de la provincia. A su vez, el mismo indicador registra cifras más bajas en Mosconi, donde se concentraba la mayor cantidad de empleados de YPF, que en Tartagal.

Ahora bien: la extrema pobreza, situación de larga data en la zona, nunca llegó a generar un proceso de las características de la organización del movimiento piquetero. En la medida en que los individuos que viven en ese contexto no lo perciban como opresivo, no hay motivo para que se produzca el intento de subvertirlo.⁶ En este sentido, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que la crisis socioeconómica que se desarrolló durante la década del noventa afectó fuertemente, por primera vez en mucho tiempo, a sectores de la clase obrera que percibían ingresos comparativamente altos, algunos de los cuales tenían una importante experiencia de organización sindical. Ambas vivencias resultan importantes a la hora de analizar la emergencia del movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi, en la que, como veremos más adelante, participaron activamente dirigentes provenientes de esos sectores. Sectores que ocupaban un lugar reconocido –y desesado– por muchos trabajadores, y en torno a los cuales confluían un conjunto de identificaciones locales –YPF, el Estado como articulador de las relaciones sociales– lo que alimentaba su capacidad de influir política y socialmente sobre los demás.

El avance neoliberal

El proceso de privatización de YPF se inició en 1990, con una política de despidos y “retiros voluntarios” masivos. Hacia 1991, en Tartagal y Mosconi habían sido desvinculados entre 2400 y 3500 trabajadores de uno u otro modo, lo que representaba el 90% del personal. (*El Tribuno*, 9/5/1997, “El origen de la crisis”; Aguilar y Vázquez, 1998, 2000; Svampa y Pereyra, 2003). Al año siguiente, se privatizaron los yacimientos, las destilerías y las plantas de YPF, que quedaron bajo la administración de distintas compañías petroleras multinacionales: Pluspetrol, Parquer Dilling, Seperbol, Texaco, Tecpetrol y Refinor. Tras una débil oposición, el sindicato del sector, SUPE, colaboró abiertamente con el proceso de privatización (ver, por ejemplo, *Clarín*, 6/1/1992, “El sindicato de petroleros estatales decidió subirse a la vereda de las privatizaciones”), lo que dificultó la organización de los trabajadores que se oponían a la concreción de esa medida. Sin embargo, durante 1991 se produjeron un conjunto de movilizaciones y asambleas multitudinarias en Mosconi, que culminaron con el corte de la ruta n° 34.⁷ Si bien esta lucha no logró frenar la privatización, impuso indemnizaciones por encima de las que se pagaron en otras regiones (Lapegna, 2000: 44), y derivó en la primer derrota electoral del justicialismo en las elecciones provinciales, a manos del Partido Renovador de Salta.⁸

Según se desprende de distintos testimonios, la experiencia constituyó un importante antecedente que nutre el corte de ruta-pueblada de 1997: “En la asamblea se decidió ir al corte y ahí fuimos y empezamos el corte [se refiere a 1997]. Fue el 7 de mayo. Por supuesto que las expectativas que teníamos nos superaron. Nosotros lo llamábamos un triunfo si podíamos juntar mil, mil quinientas personas; con el antecedente de lo que había sido o querido ser el corte de ruta cuando fue por la no privatización de YPF”. (Entrevista a Ex-concejal, actual ama de casa, de agosto de 2000, en Lapegna, 2000: 45).

Al igual que en los cortes subsiguientes, la lucha fue encabezada por sectores independientes de los aparatos políticos y sindicales tradicionales y entre los líderes de la protesta aparecen militantes de izquierda: “[...] existían cuadros obreros, con una gran experiencia combativa, que habían encabezado la lucha contra la privatización de YPF, en septiembre/octubre de 1991. Entonces, en una Asamblea Popular en Mosconi, que reunía 4.000 compañeros, César ‘Perico’ Raineri, militante del PO [Partido Obrero], mocionó la realización de un corte de ruta. Esta moción fue aprobada y se marchó desde el Complejo Deportivo de Mosconi hacia la ruta” (Oviedo, 2001: 53). La participación de sectores de izquierda no debe pensarse como una intervención desde fuera del conjunto social, sino todo lo contrario: se trata, como veremos más adelante, de actores insertos en el núcleo de relaciones sociales locales. Justamente es este hecho el que favoreció sus posibilidades de acción, que se conjugó, más

adelante, con la crisis identitaria que se desarrollaba entre los sectores populares y aportó elementos para el resquebrajamiento del bloque hegemónico.

No obstante, fines de 1991, la privatización de YPF se había concretado y el discurso neoliberal jugaba un papel dominante. Con indemnizaciones que oscilaron entre los 20.000 y los 100.000 dólares (*El Tribuno*, 9/5/1997, “Desocupados y sin asesoramiento”; Aguilar y Vázquez, 2000: 332), los ex-trabajadores de YPF se volcaron a la compra o refacción de casas, autos, electrodomésticos y otros bienes de uso; la inyección de una importante masa monetaria en el mercado local produjo un auge momentáneo en el sector comercial y de servicios. A su vez, muchos invirtieron parte de sus indemnizaciones y se lanzaron a organizar distinto tipo de micro-emprendimientos comerciales y de servicios para la población local (kioscos, bares, panaderías, carnicerías, verdulerías, remiserías, empresas de transporte, etc.) o para las petroleras que se hicieron cargo de la explotación de YPF (transporte de materiales, reparaciones, etc.).

Ahora bien, entre un año y dos años después de la privatización, comenzaron a sentirse los efectos estructurales de mediano plazo. El rol multiplicador de YPF en la región en cuanto a encadenamientos productivos era de tal centralidad, que según los cálculos oficiales, por cada puesto de trabajo directo en la actividad petrolera se generaban 13 puestos indirectos.⁹ Así, tras una breve euforia inicial, se impusieron los efectos de la reducción drástica de la masa salarial que aseguraba el consumo regular. Quienes habían apostado a proveer a las compañías petroleras servicios tercerizados, al poco tiempo de montar sus negocios se encontraron por un lado, con que las petroleras fijaban precios que dejaban escasos márgenes de ganancia, por el otro, que buena parte de los servicios que demandaban requerían tecnología de punta y estaban fuera de su alcance. Hacia 1997, de los 25 o 30 micro-emprendimientos de este tipo que surgieron originariamente sólo quedaban tres o cuatro (Aguilar y Vázquez, 1998: 50).

A su vez, la llamada *flexibilización laboral*, orientada al abaratamiento de la mano de obra, introdujo el marco legal necesario para que los pocos trabajadores que quedaron empleados por las petroleras sufrieran reducciones salariales, al tiempo que las horas de trabajo aumentaron de 8 a 12, mediante la eliminación de un turno de trabajo. Además, la administración pública en todos sus niveles fue sometida a la llamada *Reforma del Estado*, que implicó por un lado, el despido de buena parte del personal, y por otro, la contratación temporaria de trabajadores que cobraban salarios muy inferiores a los de la planta permanente. Estas medidas impactaron fuertemente en la zona, caracterizada por el fuerte peso del trabajo en el sector público. Así, en Mosconi, fue despedido el 50% del personal de la Municipalidad (Aguilar y Vázquez, 1998: 49).

No existen datos oficiales sobre el crecimiento del desempleo anual para el departamento de General San Martín, al que pertenecen Tartagal y General Mosconi. Sin embargo, la comparación entre las cifras del Censo Nacional de Población de 1991, realizado en vísperas de la privatización de YPF, y las del siguiente censo, de 2001, resulta elocuente: de una tasa de 6,2% de desempleo, se pasó a 33,7%, lo que implica un aumento de más del 540% de la desocupación. Comparada con la media provincial – que pasó del 6% al 29,2% –, la tasa de General San Martín se ubica 4,5 puntos por encima.

Como se puede ver, este conjunto de transformaciones sociales, entre las que sobresalen las consecuencias de la privatización de YPF, alteraron radicalmente el modo de vida de buena parte de la población de Tartagal y de Mosconi. La estabilidad laboral del sector público desapareció, y junto a ella los ingresos corrientes, la capacidad de consumo y la previsibilidad de la vida cotidiana. Buena parte de los marcos de referencia de los trabajadores virtualmente desaparecieron,¹⁰ lo que impactó fuertemente en el nivel de la subjetividad. Las claves que permitían una interpretación del mundo habían caducado por completo: ya no era posible conseguir trabajo y las carencias materiales se incrementaban de manera inconcebible para sujetos que no estaban acostumbrados a ellas ni estaban

dispuestos a aceptarlas. Este es el escenario en el que surgieron, poco después, las organizaciones de trabajadores desocupados de la zona.

El surgimiento de la UTD de Mosconi

Expulsados del circuito productivo y de sus antiguas organizaciones sindicales, algunos trabajadores desocupados procuraron en un comienzo aglutinarse en función de la defensa de sus intereses particulares, tendiendo de esta manera a una reconfiguración de las identidades y de los lazos sociales que habían sido destruidos. De ese modo, en 1996, la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi (UTD) dio sus primeros pasos. Apenas se organizaron, los trabajadores desocupados de la UTD buscaron determinar cuantos trabajadores de Mosconi se encontraban en su misma situación, para iniciar gestiones ante el poder político. Se trata, en un inicio, de la conformación de una agrupación de carácter gremial, que apunta a representar a los trabajadores desocupados ante el Estado. Al igual que los primeros sindicatos, la UTD nació en un marco de lucha contra el Estado: “En el ’96 ya una vez que estábamos constituidos, tomamos el Concejo, ocho personas de Mosconi, 23 días, lo transformamos a ese Concejo en un comedor para niños y ancianos... Y por lo menos la comida la tenían asegurada y bueno, a partir de ahí se fueron enterando, mucha gente que se solidarizaba, porque estábamos nosotros adentro del Concejo [...] Entonces, logramos que el gobierno reconozca que hay desocupación. Y empezaron a gestarse algunos planes, algunas cosas para la gente, algunos comedores” (Miembro fundador de la UTD, entrevista de agosto de 2000, en Lapegna, 2000: 46- 47).

La radicalidad de la medida y la capacidad de organización evidencian una amplia experiencia de lucha, que tiene al corte de 1991 como uno de sus antecedentes. Este tipo iniciativas exceden las prácticas del sindicalismo peronista tradicional, de donde proviene la mayoría de los trabajadores argentinos, incluidos los de YPF. En efecto, uno de los fundadores y principales dirigentes de la UTD hasta el año 2000 fue Juan Nievas, ex-ypefeño vinculado originalmente al PC (Partido Comunista) y luego a la CCC y al PCR (Corriente Clasista y Combativa – Partido Comunista Revolucionario). El discurso neoliberal que había sido aceptado por los referentes sindicales peronistas y buena parte de la población empezaba a ser rechazado cada vez por más sectores, que registraban su carácter ilusorio en plano de la experiencia: las posibilidades de obtener un trabajo estable como el que tenían se habían esfumado, sus condiciones de vida –y las de sus familias– habían empeorado drásticamente. Esa percepción, sumada a la intervención de actores políticos y sindicales de izquierda favoreció el desarrollo de prácticas de lucha alternativas basadas en la acción directa, que arrojaron muy buenos resultados para los manifestantes. En el caso de la toma del Concejo Deliberante, el gobierno debió reconocer a la UTD como interlocutor válido y otorgar ayuda social para descomprimir la situación. A su vez, la UTD se fortaleció doblemente por el reconocimiento de las autoridades y la solidaridad y la participación activa de la población, duramente golpeada por la desocupación; ese hecho permitió sostener la ocupación por 23 días. Todo este proceso aportó elementos para la realización del primer gran corte-pueblada de la zona, en mayo de 1997.

El corte-pueblada de 1997

En junio de 1996 y marzo de 1997 se produjeron en Cutral-Có y Plaza Huincul, provincia de Neuquén, los primeros grandes cortes de ruta-pueblada, hechos novedosos en el país, que tuvieron amplia repercusión.¹¹ Al igual que Tartagal y General Mosconi, esos pueblos del sur de la Argentina habían sido esencialmente petroleros, y al igual que en las localidades nortenas, la población se vio gravemente afectada con la privatización de YPF. El impacto mediático de esas acciones de lucha, pero fundamentalmente el hecho de que resultaron conducentes para forzar al gobierno a conceder parte de los reclamos,¹² no pasó inadvertido en Tartagal-Mosconi: “[...] creo que Cutral-Có fue... una enseñanza para todo el país. Y en el ’97 nosotros nos animamos gracias a lo que sucedió en Cutral-Có

[...] incluso el empresariado local, [...] se prendieron en el corte porque estaban admirados de lo que hizo Cutral-Có. Era muy nuevito lo que había sucedido y es como que nos impulsó a... fue como una luz donde nosotros fuimos y nos aferramos. Una posibilidad de lucha, se abrió un nuevo campo de lucha. De protesta [...] Y mucha gente acá actuó empujada por esa sensación que le produjo Cutral-Có [...] fue un espejo donde nosotros nos miramos y dijimos 'es válido'". (Entrevista a dirigente de la UTD, agosto de 2000, en Barbetta y Lapegna, 2001: 239)

Los acontecimientos de Neuquén se conjugaron con la experiencia previa del corte de 1991 y con el estado de movilización reinante en la zona desde principios de 1997. En enero, se organizó una importante movilización reclamando –y logrando– la liberación de los dirigentes de la UTD, que habían sido detenidos como consecuencia de la ocupación del Consejo Deliberante de 1996 (Oviedo, 2001: 54). Hacia el mes de marzo, se vivía un clima de descontento generalizado entre los trabajadores municipales de Mosconi, a quienes la comuna adeudaba tres meses de sueldo. Por último, tras una serie de cortes de energía eléctrica, se conformó una Comisión de Vecinos, con representantes de los medios de comunicación locales, de los comerciantes y de los barrios pobres de Tartagal (Barbetta y Lapegna, 2001: 240) para protestar contra la empresa de energía, que había sido privatizada recientemente. La Comisión convocó a una asamblea, donde se resolvió realizar un *apagón* de protesta, y se discutió la necesidad de la realización de obras de infraestructura, entre otros reclamos. De este modo, fue creciendo un clima de deliberación y descontento general donde confluían los reclamos de distintos sectores afectados por la crisis social y económica que alcanzó al conjunto social de la región poco después de la privatización de YPF. Finalmente, el 7 de mayo se realizó un nuevo apagón, tras lo cual se reunió una asamblea en la plaza San Martín de Tartagal que resolvió interrumpir esa misma noche el tránsito de la ruta n° 34, a la altura de General Mosconi, cerca de las refinerías de petróleo.

Según consta en el diario salteño *El Tribuno*, en la asamblea participaron activamente dirigentes sindicales y políticos de izquierda, y periodistas de medios locales: “[...] se realizó una asamblea donde hablaron, entre otros, los periodistas Marcelo Jerez y Claudio Sotelo, el dirigente político César Raineri, del Partido Obrero, y la delegada docente Rosana Franchi de Escolarisi” (*El Tribuno*, 9/5/97). Pero la protesta contó con el apoyo de prácticamente todos los sectores de la zona, que intervinieron activamente en el conflicto. La misma edición del citado periódico registra la participación de los desocupados, que reclamaban trabajo; y la intervención como líder destacado de Juan Nievas, dirigente de la UTD. En la edición del 14/5/1997, aparecen los nombres de los delegados designados por la asamblea que conformaron una Comisión negociadora para dialogar con las autoridades, entre los que figuran Juan Nievas y César Raineri, además de Pepe Barraza, entre otros militantes de izquierda.¹³ Como se puede ver, la influencia de ese sector político se evidencia no sólo en el tipo de acciones que se emprenden, sino en los propios actores intervinientes, que juegan un papel destacado en el movimiento en general y como referentes de los trabajadores desocupados en particular¹⁴. Los reclamos y demás referentes que fueron apareciendo dan cuenta a su vez de la participación de trabajadores municipales, aborígenes, comerciantes y empresarios, entre otros sectores.

Características y desarrollo de la protesta

Desde los comienzos del corte, los distintos sectores se dispusieron en el espacio de una manera particular, que tradujo visualmente los antagonismos sociales que persistían al interior del movimiento de protesta. En efecto, el corte se organizó en dos piquetes diferentes, cada uno con una composición social bien determinada: el piquete sur, ubicado en la primera línea de avance de las fuerzas represivas, formado fundamentalmente por trabajadores desocupados y ocupados; el piquete norte, integrado por comerciantes, empresarios y docentes, entre otros. La confluencia de miles de trabajadores desocupados en el piquete sur y el desarrollo de un proceso de deliberación popular en el que participaron los actores ya mencionados, posibilitaron la visualización de la comunidad de problemas e

intereses al interior de ese bloque social, lo que le permitió constituirse como tal subjetivamente.¹⁵ Así, podemos considerar este confluir en el mismo piquete como una instancia fundacional del movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi, en el que la vivencia de la desocupación y de las carencias cotidianas trascienden definitivamente el plano individual para asumir un carácter colectivo, en el que los propios protagonistas se reconocen y asumen una actitud combativa. Ahora bien: por su propio contenido, las nuevas identificaciones en torno a la desocupación, tal como se plantean en este caso, trascienden el orden corporativo reafirmando la condición de trabajadores de los desocupados. Esto los coloca en un nivel de relación de fuerzas que excede la de un grupo profesional, favoreciendo la extensión de la solidaridad de intereses a todos los miembros de su clase social en el terreno económico, y planteando la lucha por la igualdad política con la clase dominante. Esa lucha se tradujo en el lenguaje de la democracia directa de las asambleas, en el desplazamiento de referentes y en las disputas por el levantamiento o no del corte, temas que trataremos en seguida.¹⁶

Atendiendo al desarrollo de la protesta de 1997 en su conjunto, advertimos que el periodista Marcelo Jerez, que aparecía inicialmente como el referente principal de la protesta, rápidamente pasó a compartir (a disputar) ese lugar con varios actores, que representaban a diferentes sectores sociales. Ese desplazamiento tiene que ver con las características que fue asumiendo la protesta, que se convirtió en una verdadera pueblada. Desde el comienzo del corte hasta su levantamiento, el 14 de mayo al mediodía, el funcionamiento del sistema representativo fue abolido de hecho por las asambleas masivas realizadas en la ruta. Estas instancias de deliberación popular se asumieron soberanas en la práctica, desconociendo a los representantes municipales electos mediante el sufragio. Los delegados que se fueron eligiendo a los efectos de dialogar con los gobiernos nacional y provincial eran revocables, y debían someter las propuestas de las autoridades a la consideración de las asambleas, que podían aceptarlas o rechazarlas: “De las asambleas participan todos los sectores, desde los representantes de los periodistas de las radios FM de la zona hasta los de las siete comunidades aborígenes [...] no existe un líder definido como en las jornadas anteriores, donde actuaba como principal vocero Marcelino Jerez. Ahora, Jerez comparte un poder relativo con otras quince a diecinueve personas que representan a los sectores involucrados, pero todas las decisiones pasan indefectiblemente por las asambleas, que ayer se realizaron con una concurrencia que, en algunos momentos, superó las dos mil personas”. (*El Tribuno*, 11/5/1997, “Se mantiene sin variantes el corte de caminos en Aguaray y Mosconi”).

El desarrollo del mecanismo asambleario, la participación activa de la prensa local, y la creciente influencia de los sectores de izquierda y de trabajadores desocupados impulsó la ampliación y radicalización de las demandas. El día 11 de mayo la protesta parece haber alcanzado su punto más alto. Una asamblea masiva realizada en el piquete sur votó un pliego de reclamos que tenía siete hojas de extensión, frente a las tres del petitorio original. Los reclamos más destacados en los medios periodísticos, además de la demanda de puestos de trabajo fueron:

- a) Creación de un fondo de reparación histórica de regalías petroleras;
- b) creación de una zona franca en General Mosconi;
- c) cancelación de las deudas con empleados y proveedores de los municipios;
- d) equipamiento de los hospitales públicos;
- e) cobertura social para los desocupados;
- f) ampliación del presupuesto para comedores escolares;
- g) creación de planes de financiación para las deudas impositivas y bancarias;
- h) construcción de viviendas económicas en los barrios humildes del departamento;
- i) suspensión en el departamento de la ley federal de educación;
- j) implementación de cursos gratuitos de perfeccionamiento para los docentes desocupados;
- k) otorgamiento de tierras a las comunidades aborígenes;
- l) instalación de una planta de gas envasado en Aguaray;

- ll) construcción del dique Itiyuro II;
- m) realización de obras de infraestructura y mejoras en rutas y puentes del departamento;
- n) solución del problema del suministro de energía eléctrica.

A su vez, los cortes se multiplicaron por todo el departamento General San Martín, interrumpiendo el tránsito al sur de Tartagal y hasta la frontera con Bolivia, y en los pasos vecinales¹⁷ y el gremio docente declaró la huelga general en el departamento.

Todo este proceso, en el que participó activamente la burguesía local, nos muestra una profunda crisis de hegemonía, que permitió el avance de una amplia alianza de clases sobre el orden político instituido. En ese contexto, se visualiza la presencia de una identificación colectiva vinculada a lo local, capaz de oponerse como bloque a un otro, constituido simultáneamente por el Estado nacional, el provincial, y las empresas petroleras multinacionales. Distintos autores coinciden en señalar que el planteo de la “reparación histórica”, levantado por los manifestantes, apunta simultáneamente a las compañías petroleras multinacionales, que transfieren las ganancias percibidas fuera de la región, y a los gobiernos nacional y provincial, responsables políticos de la desestructuración económica y quienes redistribuyen la renta petrolera obtenida en la zona. En los hechos, los tres actores son identificados como un bloque al que se le oponen reivindicaciones locales que por su radicalidad llevarían a una redefinición de las relaciones sociales; en ese sentido, se insinúa de este modo la conformación de un bloque contrahegemónico.

El conjunto de identificaciones locales articuló a los distintos sectores y conserva hasta el presente gran vitalidad en el colectivo social y en las organizaciones de desocupados, particularmente en la UTD. Sin embargo, esa identificación colectiva emergente no se construyó en detrimento de la identidad vinculada con la pertenencia social, sino que es decodificada y cobra sentido en función de esa identidad, que tiende a fortificarse en esta protesta en el caso de los trabajadores desocupados.¹⁸ De hecho, la crisis de dominación que se abrió con esta protesta dio lugar a su vez a una disputa sin saldo por la dirección de la protesta entre los desocupados, y los sectores medios y empresarios. Este hecho no pasó inadvertido para muchos de sus protagonistas: ya a comienzos del corte, sectores empresarios declararon a los medios periodísticos que la protesta “nos había sobrepasado” (*El Tribuno*, 9/5/1997, “La protesta nos sobrepasó”). El martes 13 de mayo, luego de que las autoridades provinciales se hicieran presentes en la zona, la burguesía local logró la satisfacción de parte de sus demandas, y se retiró del corte.¹⁹ Pero la medida no se levantó: los trabajadores desocupados reforzaron sus reclamos en torno a la obtención de trabajo estable, rechazando los ofrecimientos del gobierno de planes “Trabajar”²⁰ y subsidios de desempleo; en su lugar, reclamaban “[...] la creación de 5000 puestos de trabajo de 400 pesos cada uno, con una duración de tres años, más los adicionales correspondientes a salario familiar y obra social” (*El Tribuno*, 12/5/1997, “Los ‘piqueteros’ aprobaron anoche su nueva lista de requerimientos”). Finalmente, en un marco signado por las constantes amenazas de represión, el día 14, y tras una sustancial mejora en la oferta del gobierno²¹ los trabajadores desocupados levantaron el corte definitivamente. El acuerdo final introdujo un condicionamiento a las reivindicaciones obtenidas por el empresariado: para acceder a la refinanciación de las deudas era necesario comprometerse a otorgar tres puestos de trabajo como mínimo (*El Tribuno*, 15/5/97, “El arreglo”). Se repite aquí la disputa por la hegemonía a nivel local, aunque el desenlace no se produzca todavía. Habrá que esperar a los siguientes cortes-pueblada para que se visualice una nueva relación de fuerzas.

Después del corte: la organización silenciosa

Tras la finalización del levantamiento popular de 1997, el orden político fue restablecido: los poderes ejecutivos y legislativos de los municipios de Tartagal y Mosconi fueron intervenidos por la provincia, que designó nuevas autoridades. Sin embargo, los acontecimientos producidos dejaron una

profunda huella en la memoria colectiva de sus habitantes, en particular de los trabajadores desocupados que participaron de la protesta, que aprovecharon la experiencia para avanzar en su organización.

Hasta fines de 1999, reinó en la zona una relativa tranquilidad política. Este hecho guarda relación con la aparente estabilidad de los planes sociales otorgados, que habrían sido renovados tras su vencimiento asegurando la contención necesaria para evitar nuevos estallidos populares. Esto no significa que no se hayan desarrollado luchas menores ni que las redes sociales que surgieron o se fortalecieron tras el corte-pueblada de 1997 hubiesen sido desactivadas. La UTD se fortaleció y continuó su lucha por la obtención de puestos de trabajo estable, utilizando el recurso del corte de ruta y el corte de acceso a las empresas petroleras, logrando en algunos casos la incorporación de personal.²² Esos cortes no fueron masivos ni se extendieron en el tiempo más que algunas horas. Existen testimonios sobre la realización de un corte de ruta de siete horas en agosto de 1997, es decir, tres meses después del corte-pueblada, y de un corte de acceso a una petrolera de la zona en el año 1999, a partir del cual se obtuvieron 120 puestos laborales y cursos de capacitación para 700 personas (Equipo de Educación Popular de la UPMPM, 2003: 43 y 44). Por otra parte, las propias características provisorias de los planes Trabajar, que debían ser renovados permanentemente y que sufrieron importantes recortes en el monto del subsidio –de 220 pesos originales, hacia 1999 los planes habían sido reducidos a 160 pesos, generando malestar entre los desocupados. (Ver *Prensa Obrera* 23/12/1999, “Que se vaya el corrupto intendente de Tartagal”)–, favorecieron la organización de los beneficiarios en Tartagal y Mosconi, dispuestos a retener la asignación. Estos actores intervinieron con referentes propios en el corte que se produjo a fines de 1999, lo que indica un proceso de organización que se desarrolló entre 1997 y 1999. La creación del Sindicato de Trabajadores de los Planes (SITRAP) fue uno de los emergentes de ese proceso.

Por otra parte, el avance en la aplicación de distintas modalidades de “autogestión” en los ámbitos de la salud y la educación, que ponían en peligro el financiamiento de escuelas y hospitales, y los intentos de achicamiento de la planta de trabajadores municipales, motivaron distintas protestas en la región.²³ A su vez, se reunieron algunas Asambleas Populares con la presencia de distintos sectores, donde se discutieron esos temas y se denunció el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno y las empresas petroleras en 1997, destacándose entre los que quedaron pendientes la creación de puestos de trabajo estables en las petroleras. En ese contexto, se decidió marchar el 7 de mayo de 1998 a la ruta n° 34, para reclamar por las promesas incumplidas y en conmemoración del levantamiento popular.²⁴ Como se puede ver, el mecanismo de la Asamblea Popular y los sucesos de 1997 difirieron su efecto más allá del momento de su irrupción, alimentando la experiencia organizativa de distintos sectores de trabajadores ocupados y desocupados, que constituían el grueso de los actores que permanecieron políticamente activos después del primer corte-pueblada.

El corte de 1999

En octubre de 1999, tras registrarse atrasos de sueldos y amenazas de despidos, el intendente de Tartagal anunció que dejaría cesantes a 162 trabajadores municipales, en el marco de un ajuste de los gastos provinciales impulsado por el gobernador del PJ Juan Carlos Romero, y auspiciado por el gobierno nacional de la Alianza (UCR-Frepaso) recientemente electo. El gremio del sector, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), lanzó distintas medidas de lucha, que incluyeron juntas de firmas, marchas y la instalación de una olla popular frente a la municipalidad, sin lograr la reincorporación de los cesanteados. Después de un mes de protestas de los municipales, se sumó un hecho que habría de torcer el rumbo de los acontecimientos. En el contexto de la asunción del nuevo gobierno nacional, muchos de los planes Trabajar, que beneficiaban a los trabajadores desocupados, no

fueron renovados. Así, los intereses inmediatos de ambos sectores confluyeron, y en una asamblea conjunta, celebrada el 13 de diciembre, se decidió cortar la ruta n° 34 a la altura de General Mosconi.

El pliego de reclamos original constó en esa oportunidad de nueve puntos, a saber:

- a) Reincorporación de los 162 despedidos del municipio de Tartagal;
- b) continuidad de los planes “Trabajar”, con un mínimo de dos años y un salario de cuatrocientos pesos, obra social y aportes provisionales;
- c) sanción de una ley provincial que impida el despido en la administración pública;
- d) que las empresas petroleras de la zona cumplan la promesa contraída en 1997, de crear 1.400 puestos de trabajo, reduciendo la jornada laboral y repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados;
- e) no a la privatización de los organismos de la administración pública;
- f) pago inmediato del programa de desocupados, régimen de jubilaciones anticipadas para todo el personal desvinculado del Estado;
- g) renuncia inmediata de todos los funcionarios públicos de la Municipalidad de Tartagal (intendente, concejales y jueces);
- h) no a la persecución de los luchadores y retiro inmediato de las fuerzas que arribaron a la localidad;
- i) que las petroleras eliminen los convenios colectivos de trabajo realizados con la UOCRA (gremio de la construcción).

(Resumen elaborado sobre la base de los datos publicados en *El Tribuno*, 15/12/1999, “Qué piden los manifestantes” y *Prensa Obrera*, 23/12/1999, “La clase obrera de Salta comenzó una lucha gigantesca”).

Como se desprende de los propios reclamos, en esa oportunidad se trató de un corte homogéneo, de carácter obrero. La ausencia de sectores empresarios, a diferencia de 1997, alentó al gobierno provincial a recurrir sumariamente a la represión para despejar la ruta. Pero los agentes del grupo antimotines de la policía de la provincia fueron obligados a retroceder por los manifestantes, que finalmente lograron retomar el control de la ruta. En medio de los enfrentamientos, fue detenido Fermín Hoyos, secretario general de ATE. Como respuesta, los manifestantes tomaron como rehén a un comisario de la policía provincial, y exigieron la liberación del dirigente sindical a cambio del efectivo policial. A pesar de las amenazas de iniciar procesos judiciales, recién al día siguiente, y una vez que Fermín Hoyos fue puesto en libertad, se hizo lo propio con el comisario.

Otro de los aspectos destacables reside en el hecho de que desde el principio del corte se instaló el mecanismo de la Asamblea para tomar resoluciones y elegir un grupo de delegados que viajaron a Buenos Aires para negociar. Al mismo tiempo, la Asamblea resolvió solicitar el cierre de los comercios de Tartagal y Mosconi en respaldo a la medida de fuerza, pedido que se cumplió parcialmente (Ver *El Tribuno*, 16/12 y 18/12 de 1999). El reclamo por la reincorporación de los empleados municipales fue satisfecho, pero las demandas que venían levantando los desocupados desde 1997 no recibían respuesta: “Nosotros no queremos planes ‘Trabajar’, queremos que a las empresas se les imponga que den 1.400 puestos de trabajo; que ya acordaron en el ‘97 y nunca cumplieron. Queremos que haya un decreto o una ley que las obligue a tomar estos 1.400 obreros”. (Entrevista a Pepino Fernández, dirigente de la UTD, en *Prensa Obrera*, 23/12/99). Este hecho determinó que el corte se extendiera por once días, a pesar del intenso calor —entre 42° y 50° centígrados— y las constantes amenazas de represión de la justicia y de las autoridades nacionales, que ordenaron el traslado de fuerzas de gendarmería nacional a las inmediaciones de la ruta.²⁵ Finalmente, el 21 de diciembre, tras haber logrado la reincorporación de los empleados municipales, ATE se retiró de la ruta. Así, igual que en 1997, los desocupados sostuvieron la protesta por su cuenta. El corte se levantó el día 23, tras la obtención de parte de los reclamos, entre los que se destacan el mantenimiento de los 1.963 Planes “Trabajar” existentes y la creación de 3 mil nuevos puestos para los desocupados, y la entrega de 16

mil kilos de alimentos no perecederos. A su vez, el gobierno nacional se comprometió a apoyar las Pymes formadas por los desocupados de YPF y a gestionar ante las petroleras la reducción de la jornada laboral de 12 a 8 horas, para facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Alcances del segundo gran corte de ruta

El corte de 1999 se caracterizó por la conformación de un bloque de protesta socialmente homogéneo²⁶ y altamente combativo atendiendo a su accionar. Con el objetivo de obtener sus demandas, los manifestantes radicalizaron su accionar, se impusieron sobre las fuerzas represivas, y se reconocieron como un conjunto con solidaridad de intereses: “[...] nos vinieron a reprimir para impedir que cortemos la ruta, pero los derrotamos y nos quedamos con muchas de sus armas de represión. Retuvimos unas horas al comisario arriba de un camión cisterna lleno de petróleo hasta que logramos que liberaran a uno de los nuestros que estaba preso”. (Reportaje a ‘Cuchilla’, trabajador desocupado, en Prensa Obrera, 23/12/1999).

Los manifestantes llegaron a ignorar por completo el orden legal instituido en la medida en que percibían que respondía a intereses incompatibles con los suyos propios; en esta línea, visualizaron al Estado como el representante de intereses particulares.²⁷ Parte de esta visualización se expresó en la exigencia de la renuncia de las autoridades locales. A su vez, el desarrollo de la dinámica asamblearia permitió plantearse a un número creciente de actores la posibilidad de la participación directa en los asuntos del gobierno, más allá de las lógicas representativas y delegativas dominantes: “PO: Entonces, ¿quién tiene que gobernar? ‘Gipi’: Los que producimos estas ganancias, nosotros. No somos plenamente conscientes, muchas veces, de la fuerza que tenemos; por eso, cuando cortamos la ruta y vemos sus debilidades, vuelven los ‘políticos’ a salvarles las papas” (Reportaje a ‘Gipi’ Fernandez, referente de la UTD, en Prensa Obrera, 23/12/1999).

“Estela: Acá deben irse el intendente y todo el Concejo Deliberante y los revisores de cuentas del municipio. PO: Entonces, ¿quién gobierna? Estela: Hemos demostrado que nosotros podemos administrar las cosas, mejor que ellos a pesar de que no somos tan letrados. Acá se resuelve todo por asamblea, nadie se queda con la plata de nadie, no necesitamos de los zánganos de la Intendencia. No sólo necesitamos trabajo, también necesitamos sacarnos de encima a los que nos han robado toda la vida” (Reportaje a Estela, mujer de un trabajador municipal, en Prensa Obrera, 23/12/1999).

A lo largo de la acción de protesta, los desocupados jugaron el papel más dinámico, motorizando el corte al principio y sosteniéndolo por su cuenta una vez que los empleados municipales se retiraron. Esta lógica, que se repitió en distintos puntos del país, es la que fue dando forma a la identificación piquetero-trabajador desocupado que empezó a generalizarse para esa época. Tras el levantamiento del corte el movimiento piquetero –entendido de ese modo– conservó un rol activo, organizando la entrega de alimentos y de los planes Trabajar. El diario *El Tribuno* refleja ese hecho con claridad: “La entrega [de los alimentos] estuvo a cargo de Dora Velázquez (plan “Trabajar” de Tartagal) y Juan Carlos González (representante de los desocupados de Tartagal), junto a Juan Nieva y Juan Carlos Ramírez, representantes de los ‘trabajadores desocupados’ de General Mosconi. El control de las entregas estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, cuyos efectivos acompañaron a los responsables elegidos en las visitas a los barrios de General Mosconi y Tartagal. [...] Las entregas se harán sobre la base del relevamiento –que incluye a aborígenes– realizado por los representantes de los ex-manifestantes. [...] Para hoy, en tanto, se espera la llegada de la primera comisión del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sus miembros, junto a representantes de Tartagal y Mosconi, tendrán a su cargo el seguimiento y distribución de los planes ‘Trabajar’ en el futuro. Para ello fueron electos nueve representantes de Tartagal y seis de Mosconi”. (*El Tribuno*, 27/12/1999, “La Nación entregó ayuda alimentaria en el Norte”)

A partir del fragmento citado, surgen elementos de gran importancia para el análisis. En primer lugar, es de destacar que la relación tradicional entre el gobierno y los representados aparece invertida: los delegados elegidos por los piqueteros en Asamblea son los que están a cargo de las entregas, los agentes estatales –en este caso, la gendarmería– ejercen una función de contralor. Al mismo tiempo, la determinación de quiénes serán los que recibirán la ayuda alimentaria, corre por cuenta de los piqueteros. Por su parte, la distribución de los planes se proyecta a través de una gestión compartida. A partir de esto es posible pensar que el movimiento de desocupados y los mecanismos de democracia directa desplazaron en ese momento al Estado en algunas de sus funciones, y que los piqueteros fueron visualizados como un eje de referencia de parte de la comunidad. Las iniciativas de lucha, la tendencia a favorecer la participación popular, y el propio carácter del reclamo de trabajo estable, principal reivindicación levantada por los piqueteros de Tartagal-Mosconi,²⁸ favoreció ese desarrollo. El carácter estructural de la desocupación en la Argentina actual excluye la posibilidad de dar una respuesta positiva a esa demanda dentro de los marcos del sistema. Es por eso que la lucha sistemática en función de su satisfacción excede el ámbito sectorial, ubicándose en el plano de los intereses del conjunto de las clases explotadas. En esta línea, la insistencia de los trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi en torno a este reclamo, que resulta justo y legítimo dentro del orden de ideas dominante, y la repercusión de sus experiencias de lucha en todo el país, contienen un elevado potencial subversivo, teniendo en cuenta la profundidad de las transformaciones sociales y políticas necesarias para satisfacerlo. Como es sabido, la propia Constitución Nacional garantiza, en el artículo 14, el derecho a trabajar. Los reclamos de los desocupados adquieren especial fuerza al insertarse en la contradicción existente entre el marco legal y el material, dada la inexistencia de ese derecho en la práctica.

El corte-pueblada de mayo del 2000

El ascenso de la Alianza al poder implicó un cambio en materia de las políticas de ayuda social, que siguieron un curso errático y contradictorio. No teniendo la capacidad organizativa necesaria, y para no dejar en manos de la red clientelar del PJ la distribución de la ayuda social, el oficialismo impulsó la participación de distintas organizaciones intermedias, a través de las cuales la UTD de Mosconi comenzó a presentar sus propias iniciativas, independientemente del municipio (Svampa y Pereyra, 2003: 94). Este hecho favoreció el crecimiento de la organización, que impulsó distintos proyectos productivos orientados a satisfacer distintas necesidades de la comunidad. Pero por otra parte, el gobierno aliancista redujo significativamente la cantidad de planes sociales.²⁹ En Tartagal-Mosconi, de un total de 4.192 planes otorgados en el año 1999 se pasó a 1.917 en el 2000 (*El Tribuno*, 20/5/2000, “Las declaraciones de Álvarez son lamentables”). De ese modo, los acuerdos firmados con los piqueteros en diciembre no fueron cumplidos, lo que motivó nuevos cortes de ruta en marzo y abril de 2000. (Ver Lapegna, 2000: 54 y 55; y *El Tribuno*, 3/5/2000, “Corte a la altura de General Mosconi”). A eso se le agregaron la falta de pago de los planes, amenazas de desalojo por falta de pago de alquileres y el reemplazo de parte del sueldo de los empleados municipales por vales de alimentos (Oviedo, 2001: 97). En ese contexto, fue madurando un clima de agudo descontento que derivó en el tercer gran corte de ruta, seguido de una pueblada de características inéditas en la región, a principios de mayo de 2000.

Hacia abril de 2000, se desarrollaba una intensa disputa política entre el gobierno y el PJ. La negativa de la Alianza a la aprobación de planes sociales estaba afectando seriamente a la red clientelar del PJ en todo el país, que dependía en parte de esos recursos para sostener su funcionamiento, en especial en la provincia de Buenos Aires. A su vez, el gobierno intentaba aprobar la *Reforma laboral*, que profundizaba la flexibilidad y precariedad del régimen laboral que caracterizaron a los años del menemismo. En ese contexto, el PJ desplegó un discurso de oposición, a fin de presionar a las autoridades nacionales (Ver por ejemplo, *Clarín*, 28/4/2000, “El gobierno condicionó a los planes

Trabajar” y *El Tribuno*, 3/5/2000, “Sin apoyo de la Alianza, diputados del PJ van por más planes Trabajar. Si el bloque oficial no baja al recinto, los justicialistas no acompañarán la reforma laboral”).³⁰ Por otra parte, las luchas sociales comenzaban a multiplicarse en todo el país, y en el gobierno se veía con preocupación la posibilidad de que se produjesen estallidos sociales en distintos puntos. En Tartagal y en Mosconi, el malestar social reinante se conjugó con la disputa entre los partidos del poder, y tras la instalación de una olla popular frente a la municipalidad de Mosconi, se inició un nuevo corte de la ruta n° 34 con el apoyo más o menos visible de ambos intendentes, hecho que aparece confirmado en distintos testimonios y artículos periodísticos: “Entonces la clase política que gobierna Tartagal manda a cortar la ruta. Los mismos que gobernaban mandan a cortar la ruta. El vocero del corte de ruta es Cacho Javier. Cacho Javier [...] es operador político del intendente Ángel. El vocero pasa a ser Cacho Javier, que como te digo es operador político del intendente. Y nosotros tenemos la información que desde Mosconi, el intendente García también había movilizado un poquito a cortar”. (Entrevista de agosto de 2000 a periodista, miembro de la comisión negociadora de 1997, en Lapegna, 2000: 34.)³¹

En Mosconi, más allá del apoyo del intendente a la protesta, el movimiento principal surgió de un grupo de mujeres beneficiarias del plan Trabajar, que solicitó el apoyo a UTD para reclamar por la continuidad y la falta de pago de los subsidios. (Ver *Prensa Obrera*, 25/5/2000, “Hablan los protagonistas”). De este modo, los intereses de los sectores del poder político local convergieron circunstancialmente con los de los trabajadores desocupados, y se inició un nuevo corte de la ruta n° 34 el 2 de mayo, a la altura de General Mosconi. Al día siguiente, los desocupados de la vecina localidad de Embarcación realizaron otro corte, que fue reprimido y levantado el 5 de mayo por fuerzas de la gendarmería, que actuaron según las instrucciones judiciales. Las mismas instrucciones fueron impartidas con relación a la protesta de los trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi, aunque a pesar de las amenazas, no se hacían efectivas.³² El carácter dual de la protesta –impulsada a la vez por sectores populares y por referentes del poder local– comenzó a disolverse hacia el 7 de mayo, día en que se cumplía un nuevo año desde el primer gran corte de 1997. En esa fecha, los manifestantes apostados en la ruta, que según distintas fuentes periodísticas oscilaban desde el principio del corte entre 300 y 350 personas, decidieron celebrar ese aniversario con distintos artefactos de pirotecnia; las explosiones hicieron pensar a los pobladores de Mosconi que la protesta estaba siendo reprimida, lo que los impulsó a concurrir masivamente a la ruta (Lapegna, 2000: 35). En ese cuadro, se pueden ver los lazos de solidaridad que se fueron tejiendo entre los piqueteros y el conjunto de la comunidad, compuesta mayoritariamente por trabajadores ocupados y desocupados.³³

Un día después de ese acontecimiento, comenzaron a aparecer versiones sobre la presencia de grupos armados entre los manifestantes, de las que se hizo eco rápidamente el ministro del Interior de la Nación, Federico Storani (Ver *El Tribuno*, 9/5/2000, “Rociaron tanques de Refinor”; *El Tribuno* 10/5/2000, “Storani denunció la presencia de personas armadas”; *Clarín*, 10/5/2000, “Mandaron gendarmes para despejar una ruta en Salta”; *Página 12*, 11/5/2000, “Con la espada de la orden de desalojo”). Mientras tanto, se convocó a un “Comité de Crisis”, integrado por los gobiernos nacional y provincial, que se disponía a ordenar la actuación de las tropas de gendarmería para desalojar por la fuerza la ruta.³⁴ El Comité de Crisis recibió un pliego con los reclamos de los piqueteros de Tartagal-Mosconi, y de la localidad vecina de Aguaray, que se habían sumado a la protesta.

El levantamiento popular

Hacia el 11 de mayo, las amenazas de represión se multiplicaron, y comenzó a circular el rumor de que era inminente el avance de tropas de gendarmería nacional y de la policía provincial. Ante esa situación, las comunidades de Tartagal y Mosconi se organizaron para apoyar y defender el corte. En Mosconi, la sirena del cuerpo de bomberos era activada cada vez que se suponía se acercaban

las fuerzas represivas, y miles de pobladores se volcaban a la ruta: “Confusión y tensión fueron las características de la jornada de ayer en el corte de ruta en General Mosconi. Alimentado por esta situación, creció el número de manifestantes, que de trescientos que había al mediodía pasaron a cerca de cuatro mil personas en horas de la tarde” (*El Tribuno*, 12/5/2000, “Aumentó la tensión en el corte de ruta en General Mosconi”).

La represión se produjo al día siguiente, el 12 de mayo, a la madrugada.³⁵ Cientos de efectivos de Gendarmería y de la Policía de Salta atacaron a los manifestantes, que se defendieron con piedras y palos. Después de poco más de una hora de intensos enfrentamientos, que incluyeron la quema de dos camiones que fueron utilizados como barricadas, los piqueteros retrocedieron hacia el pueblo de General Mosconi. La Policía de la provincia ingresó al pueblo en busca de los piqueteros y comenzó a allanar el hospital y domicilios particulares donde presuntamente se habían refugiado, al tiempo que lanzaba gases lacrimógenos y disparaba con balas de goma y de plomo por las calles;³⁶ actuando, en suma, como una verdadera fuerza de ocupación: “Durante el operativo de desalojo de la ruta un grupo importante de piqueteros logró huir hacia el pueblo, ingresando por las calles de los barrios 17 de Agosto y 8 de Diciembre. En cuestión de minutos se hizo presente en el lugar un importante número de policías, que comenzó a perseguir a los manifestantes. Estas acciones se caracterizaron por una violencia insólita, ya que los uniformados entraban a las casas rompiendo las puertas e incluso agrediendo a los vecinos que reclamaban por los excesos. Los gases lacrimógenos y las balas de goma no respetaron ni siquiera los interiores de las viviendas”. (*El Tribuno*, 13/5/2000, “Violencia en Mosconi”).

Ese hecho terminó por provocar un estallido popular sin precedentes en la zona. La población se volcó masivamente las calles, tomó la comisaría, expulsó a la policía del pueblo, atacó los símbolos del poder político y económico –la municipalidad fue destruida e incendiada, lo mismo sucedió con un cajero automático del banco Macro, ex banco Provincia–, se encaminó hacia la ruta. Mientras tanto, en Tartagal, apenas se conocieron los acontecimientos, sucedió otro tanto: miles de personas salieron de sus casas –más de 10 mil personas según *Clarín*, más de 20 mil según *El Tribuno*– y recorrieron rápidamente los siete kilómetros que los separaban del lugar donde estaba instalado originariamente el corte, se unieron a los miles de manifestantes de Mosconi y enfrentaron conjuntamente a las fuerzas represivas, que fueron obligadas a retroceder. En ese punto, el conflicto presenta los elementos de una verdadera guerra civil, con dos bandos bien delimitados: el pueblo de Tartagal-Mosconi, que participa masivamente –incluida buena parte de la prensa local, que adoptó una posición favorable a los manifestantes–³⁷ y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, que intervienen por orden de los grupos dirigentes de ambas jurisdicciones.³⁸

En momentos en que la Gendarmería era obligada a retroceder ante el avance incontenible de los manifestantes, y a pedido del gobierno nacional, intervinieron representantes de la Iglesia católica, que lograron establecer una tregua. La ruta quedó bajo el control del pueblo de Tartagal y de Mosconi, y el gobierno se vio forzado a negociar. En la ruta se celebraron Asambleas Populares que elaboraron un pliego de reclamos que retomaba los reclamos incumplidos de 1997 y 1999, y los superaba, exigiendo por ejemplo la creación de 15.000 puestos de trabajo genuino. Asimismo, se eligieron 15 delegados –tanto Pepino Fernández como Pepe Barraza fueron electos (ver *El Tribuno*, 14/5/2000, “Restituyeron los Planes Trabajar”; y *Prensa Obrera*, 25/5/2000, “La pueblada de Tartagal y Mosconi: la victoria de un gran levantamiento popular”)– para negociar con los representantes de la nación y la provincia, aunque la Asamblea Popular conservó el poder de decisión: “[...] a las 7.30, surgía de la mesa de negociación la primera de las actas-acuerdo, que luego, tras las asambleas populares celebradas en el piquete, volvían al recinto de negociación con enmiendas, observaciones y nuevos requerimientos votados en plena ruta”. (*El Tribuno*, 14/5/2000, “Restituyeron los planes Trabajar”). De hecho, el primer acta-acuerdo, sometida a consideración de la Asamblea a primeras horas de la mañana

del día 13, fue rechazada por no incluir entre sus puntos la intervención provincial de los municipios involucrados (Ver *Clarín* 14/5/2000, “Del día de la violencia a la larga noche del acuerdo”). Finalmente, después de 12 horas de negociaciones, cuando los delegados comunicaron a la Asamblea la aceptación por parte del gobierno de la mayor parte de las exigencias de los manifestantes, se decidió el levantamiento del corte.

Implicancias del levantamiento popular

En el marco del levantamiento popular se desplegó un nuevo capítulo de la crisis de hegemonía que se venía manifestando en los anteriores conflictos, alcanzando esta vez un elevado nivel de desarrollo. En el corte de 1999, el Estado y sus agentes fueron identificados como un bloque adversario. En esa línea fue que se desconoció el orden legal, se tomó de rehén a uno “de los suyos”, se enfrentó y obligó a retroceder a la policía de la provincia. Sin embargo, estas acciones estuvieron limitadas a los piqueteros que cortaban la ruta y los manifestantes que los apoyaban; en mayo de 2000 fue el pueblo de Tartagal-Mosconi en su conjunto el que se organizó como bloque contra las fuerzas represivas del Estado, en defensa de los piqueteros. Lo mismo se produjo, en una escala menor, incluso antes de la represión, cuando miles de pobladores se acercaron a la ruta para apoyar a los piqueteros ante las versiones que anunciaban el avance de las fuerzas de seguridad. Estos hechos muestran una relación de fuerzas ideológica que es favorable al movimiento piquetero, de ahí que los argumentos del gobierno nacional y provincial para justificar la represión ante la población, que incluían la supuesta identificación de “grupos armados” e “infiltrados”,³⁹ no fuesen escuchados.

Sin embargo, la entrada de la policía provincial en Mosconi constituyó un momento fundamental, comparable a la entrada de un ejército de ocupación. La población, que se mostró solidaria con la causa piquetera desde un principio, no cayó presa del pánico, sino que salió a las calles a expulsar al “invasor”. A su paso, atacó a las instituciones “colaboracionistas”: el poder político local, representado por la municipalidad, el poder económico, representado por el banco, la comisaría, sucursal de la Policía de Salta. Todos los representantes del Estado fueron visualizados como enemigos, de ahí la acción contra los símbolos del poder que le confiere a esta pueblada un nivel de radicalización mucho más elevado que la de 1997. Se trata del despliegue del momento “militar” (Gramsci, 2001: 57) de las relaciones de fuerzas entre las clases, en el que la dispersión y la pasividad de las masas es superada, dando lugar al reconocimiento de los intereses comunes y la necesidad de su defensa, hecho que lleva al enfrentamiento con las fuerzas del orden. Desde luego, esta situación tiene un carácter oscilante, no permanece de una vez y para siempre tras haberse manifestado, pero no se olvida fácilmente.

Otro aspecto que resulta necesario destacar, es el hecho de que mientras duró la pueblada, los piqueteros se convirtieron en el sector dirigente de la población de Tartagal-Mosconi. En su defensa se marchó hacia la ruta, se enfrentó a las fuerzas represivas. El prestigio ganado por los piqueteros desde el '97 a esta parte, y la estrecha relación entre ellos y el resto de la población, son factores que no pueden desconocerse a fin de explicar este fenómeno. El piquetero no constituye una otredad con respecto a la comunidad, es un familiar, un amigo, un conocido. Ahora bien, esta identificación es posible porque el movimiento piquetero ha logrado que su lucha, centrada en el problema de la desocupación, sea visualizada como interés general, de ahí su potencialidad para encabezar el bloque contrahegemónico que parece emerger. A su vez, el movimiento piquetero asumió las reivindicaciones de todo el pueblo, levantando las demandas incumplidas formuladas en el primer corte-pueblada de 1997. Una de las derivaciones de esta situación es la modificación de la relación de fuerzas entre las clases sociales, hecho que se encuentra reflejado en la elección de los delegados que negociaron con las autoridades. A diferencia de la primera pueblada, en la que la comisión negociadora estaba compuesta por uno o dos representantes de cada sector, en mayo del 2000 los delegados no tenían una adscripción

corporativa: respondían a la Asamblea Popular, conformada mayoritariamente por trabajadores ocupados y desocupados.

Por último, en esa última oportunidad el Estado no pudo figurar como partícipe en la distribución de la ayuda social, que según lo acordado quedó a cargo de la Iglesia católica y representantes piqueteros. La Iglesia debió cumplir funciones del Estado, lo que devela la debilidad del orden político imperante. En la fase álgida del conflicto, el Estado no contaba con la legitimidad necesaria para hacerse cargo una actividad social vital como es la distribución de los recursos necesarios para la vida, por lo que el régimen buscó refugio en un engranaje cultural como la Iglesia, que conserva su integridad y ascendencia en la zona.

Avance del movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi

A partir de la pueblada de mayo de 2000, el movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi entró en una nueva etapa. En Tartagal, algunos días después del corte se conformó la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD), liderada por Pepe Barraza, del Partido Obrero. Como ya mencionamos, Pepe Barraza contaba con una amplia experiencia como trabajador estatal y militante sindical y político.⁴⁰ Por otro lado, la UTD se consolidó como la organización de desocupados más importante de la zona, y Pepino Fernández se afirmó como su principal dirigente. Al igual que Juan Nievas, que por ese entonces se retiró de la UTD, Pepino Fernández fue trabajador de YPF, pero no había militado de manera orgánica. Sin embargo, no era políticamente inocuo: hacia finales de la dictadura, debió dejar Mosconi e instalarse en el sur del país, tras denunciar el uso de fluidos contaminantes por parte de los directivos de YPF. Allí, supo ganarse el reconocimiento de sus compañeros de trabajo, lo que lo convirtió en un delegado sindical de hecho: “Como yo estaba en el equipo tenía mucho contacto con la gente, ¿ha visto?... y eso me dio lugar a que la gente reconociera [...] yo aparte no era un mal técnico, andaba bien dentro de mi trabajo y ahí conocí a mucha gente y empezamos a ayudarnos unos a otros [...] poníamos plata para ayudarse ¿ha visto?... hacíamos casas... formábamos una unidad [...] colaboraba con mucha gente, era solidario porque mi trabajo es más técnico... pero yo trabajaba a la par de los muchachos, del mecánico, del soldador, del boca de pozo, del que traía las bolsas [...] y después me gané la simpatía de mucha gente y mucha gente tenía... envidiaba el lugar porque tenía poder de decisión y poder de manejar a toda esa gente, ¿no? pero por el trabajo, no por ser político ni por hablar bien” (Entrevista del autor a Pepino Fernández, junio de 2005). En ese contexto, participó con un rol destacado en las luchas contra la privatización de YPF, y protagonizó diversos cortes de acceso a las empresas como forma de protesta en el sur del país, modalidad que impulsó después desde la UTD. Otros referentes de la UTD, como Rodolfo “Chiqui” Peralta, trabajaron en YPF y tuvieron experiencia sindical y política, en este caso como delegado de su sector y como miembro del Partido Intransigente (PI). (Entrevista del autor a Chiqui Peralta, junio de 2005).

El compromiso y la solidaridad ante los problemas cotidianos, junto a la capacidad de liderar sin alejarse del resto de sus compañeros, constituyen características comunes de estos dirigentes, que les facilitaron volcar sus experiencias militantes –orgánicas o no– en torno al crecimiento de un movimiento compuesto por jóvenes y mujeres sin experiencia laboral previa, desocupados con moderado, escaso o nulo nivel de politización, ex-ypefeanos y sectores marginados previamente al avance neoliberal. En parte debido al prestigio ganado en la lucha, en parte por sus propias personalidades, Pepino Fernández y Pepe Barraza desempeñan un rol excluyente en tanto figuras líderes de sus organizaciones, y casi todas las iniciativas cotidianas de acción surgen de ellos. En la CTD-PO se realizan asambleas periódicas donde se refrendan esas propuestas y se comparte la caracterización del Partido Obrero de la situación política; la UTD no suele realizar asambleas internas, pero no por eso las iniciativas tienen menos apoyo de las bases.

En el año 2000, ambas agrupaciones comenzaron a manejar directamente gran cantidad de planes Trabajar, evitando de este modo el manejo clientelístico característico del poder político. Para asumir el control de los planes, debieron presentar proyectos “comunitarios” o “productivos” en el marco de los cuales se desarrolla la “contraprestación laboral” a la que están obligados los beneficiarios según la reglamentación vigente. A partir de estos proyectos, desde el año 2000 hasta la actualidad, la UTD y la CTD-PO han desarrollado un conjunto de actividades vinculadas a las necesidades de la comunidad. La experiencia de haber sufrido y derrotado la represión, y la de hacerse cargo de administrar la ayuda social que garantizaba los medios de vida elementales a buena parte de la población, consolidaron al movimiento y lo legitimaron aún más ante la comunidad.

La persistencia de los elevados índices de desempleo –que de acuerdo a las estimaciones de los respectivos municipios son del 60% en Mosconi (Municipalidad de Mosconi, 2005), y del 50% en Tartagal (Municipalidad de Tartagal, 2004)–, en un contexto en el que se habían puesto en pie organizaciones de lucha representativas e independientes de los sectores del poder, actuó como una usina que multiplicaba la influencia de un movimiento de trabajadores desocupados, que no se limitaba a gestionar planes sociales. Tras el corte de mayo de 2000 –y hasta la actualidad–, la UTD y la CTD-PO comenzaron a movilizarse sistemáticamente a las sedes de las empresas petroleras, organizando cortes de acceso para exigir la contratación de desocupados y reclamar aumentos de salarios,⁴¹ con notable éxito. En función de esa práctica, se produce una situación inédita en el mecanismo habitual de la relación capital-trabajo: no son los capitalistas quienes seleccionan a los asalariados, sino que son las organizaciones de trabajadores desocupados las que imponen las nóminas de personal. Este hecho favorece a su vez la solidaridad de los contratados con los que están esperando para emplearse en las empresas, ya que son las mismas organizaciones que los ayudaron a ingresar, las que luchan para incorporar nuevos trabajadores. Como en la casi totalidad de los casos se trata de trabajos temporarios, la dinámica se reproduce cíclicamente. El marco legal favorece a las empresas, que no tienen obligación de efectivizar al personal, pero deben negociar con las agrupaciones piqueteras cada vez que ejecutan un proyecto que demande mano de obra. Dadas estas condiciones, los desocupados organizados asumen funciones sindicales, teniendo en cuenta que negocian los salarios y las condiciones laborales. Los gremios oficiales involucrados –de la construcción y del petróleo–, que han tenido una actitud de subordinación al poder político y económico, fueron notablemente desplazados por los piqueteros.

Por otra parte, en función de la utilización de la metodología del corte de acceso a las empresas, ambas organizaciones obtuvieron distintas herramientas e insumos necesarios para llevar adelante los proyectos comunitarios, ya que el Estado se desentendía de su provisión. La UTD en particular, llegó a asumir ciertas funciones municipales, en la medida en que distintos sectores –directores de escuelas y hospitales, comunidades religiosas, clubes e individuos en general– comenzaron a acercar pedidos de obras, que se realizaban –y se realizan– sobre la base de los planes Trabajar.

Proyectos comunitarios y productivos

Dentro de los llamados *proyectos comunitarios*, la UTD desarrolló una labor sin precedentes entre las agrupaciones de trabajadores desocupados, que supera tanto cuantitativa como cualitativamente a las obras ejecutadas por la municipalidad. Entre otras actividades, organizó planes de forestación y desmalezamiento;⁴² huertas para proveer alimentos a distintos comedores comunitarios y escuelas; y una variada gama de obras de infraestructura, que incluye la erradicación de ranchos y letrinas, construcción de aulas, salones comunitarios, salas de primeros auxilios, comedores e instalaciones recreativas para niños; refacción de escuelas, clubes e iglesias, entre otras. Además, cuenta con un taller de herrería en el que se producen distintos elementos para el uso público, y donde distintos jóvenes tienen la posibilidad de aprender el oficio. Por su parte, la CTD-PO se abocó a poner

en funcionamiento comedores populares; merenderos para chicos; cuadrillas de desmalezamiento en los barrios; huertas para abastecer a los comedores; cuadrillas de construcción de casas; grupos de costureras que fabrican y donan guardapolvos; servicios de corte y enseñanza de peluquería; entre otros proyectos.

Como es sabido, parte de esas actividades estaban a cargo del Estado y fueron abandonadas junto al avance del modelo neoliberal. De esta manera, las organizaciones de desocupados actúan en su reemplazo reconstituyendo la red social. Sin embargo, es necesario señalar que esa acción se despliega en un escenario en el que los sectores dominantes han logrado imponer un retroceso general de las conquistas y del nivel de vida de los trabajadores. Así, muchas de las tareas que actualmente desempeñan los beneficiarios de los planes sociales a cambio de 150 pesos por mes,⁴³ anteriormente estaban a cargo de empleados municipales el blanco y con sueldos de convenio. En este sentido, resulta significativo que tanto la UTD como la CTD consideren este tipo de planes como “paliativos”, en el marco de una lucha más general para conquistar puestos de trabajo genuinos.

En consonancia con la orientación del Partido Obrero, la CTD-PO tendió a rechazar los proyectos productivos, por considerar que generan falsas expectativas de ascenso social y pueden separar de la clase obrera a quienes participan de los mismos.⁴⁴ La UTD, en cambio, alentó distintos microemprendimientos: ladrilleras, una compactadora de botellas plásticas y una clasificadora de porotos, entre otras, con la intención de vender la producción y que los trabajadores obtengan un adicional a los 150 pesos del plan. En estos casos, la jornada laboral oscila entre 6 y 8 horas, aunque no siempre se logra colocar la producción y obtener una ganancia. Algunas de estas iniciativas, como la clasificadora de porotos, son aprovechadas por las empresas, que pueden eliminar riesgos y maximizar beneficios recurriendo al trabajo a destajo de los miembros de la UTD.⁴⁵ No obstante, resulta preciso señalar que los referentes de la UTD no consideran a estas iniciativas como una posibilidad de superación del capitalismo, sino como una variable más para conseguir ingresos para los trabajadores.

El corte-pueblada de noviembre de 2000 y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte Salta

En noviembre de 2000 se produjo un nuevo corte motivado por el incumplimiento por parte de los poderes nacional y provincial de lo acordado tras los conflictos anteriores. A su vez, la protesta involucró las luchas de los trabajadores de la compañía de transportes Atahualpa y de la empresa de energía Edesa, en rechazo a los retrasos salariales y despidos que se habían producido, es decir, excedió una vez más lo sectorial, para erigirse como caja de resonancia de las reivindicaciones populares. Al igual que en otras oportunidades, llegó la represión, que fue enfrentada por los piqueteros. El asesinato de un manifestante a manos de la policía provincial⁴⁶ hizo estallar otra pueblada, que arrasó con los símbolos de los poderes económico y político de Mosconi y Tartagal. Por la mañana del 10 de noviembre fueron destruidas las comisarías, los edificios públicos, la sucursal del Banco Nación en Tartagal y las sedes de las empresas Atahualpa y Edesa. Varias horas después, se produjeron saqueos a varios comercios tartagalenses; distintas fuentes, incluyendo a los sectores empresariales afectados, coinciden en desligar a los piqueteros de estos últimos hechos, vinculando al poder político provincial y local. De hecho, esta parece haber sido una de las tácticas adoptadas desde el poder para desprestigiar al movimiento piquetero. Lo cierto es que en ese contexto, la policía se refugió en el Regimiento de Infantería de Monte de Tartagal, y debió intervenir la gendarmería para retomar el control de las calles.

En esa oportunidad, la lucha y la deliberación popular derivó en la convocatoria, por parte de la CTD y la UTD, de un Congreso de los Trabajadores Desocupados del Departamento General San Martín, para unificar las luchas y discutir un programa común. A su vez, los dirigentes del corte hicieron un llamamiento para unificar al movimiento piquetero en todo el país, a través de una Asamblea Nacional (*Prensa Obrera*, 23/11/2000, “Llamamiento de los piqueteros de Tartagal y Mosconi a un Congreso de trabajadores y desocupados”). El Congreso se reunió el 9 de diciembre, con

la participación de la UTD de Mosconi, la CTD de Tartagal, el Frente Barrial de Desocupados de Embarcación y la Comisión de Desocupados de Pocitos.⁴⁷ Las organizaciones presentes conformaron la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte Salta, y votaron un programa que recogía las principales reivindicaciones populares y de los trabajadores desocupados que se habían expresado desde 1997. Entre otros, se aprobaron por unanimidad los siguientes puntos:

- “a) Control por la Coordinadora del acceso en los cargos a las empresas;
 - b) piso salarial de 600 pesos mensuales de básico para 8 horas de trabajo o 3 pesos la hora, para todas las actividades;
 - c) tercer turno en las empresas petroleras y reparto de las horas de trabajo sin bajar los salarios;
 - d) imponer a la nación, la provincia y a todos los municipios que la obra pública se construya por administración y contratación directa de los compañeros por la municipalidad, eliminando el negocio de las contratistas;
 - e) Fondo Especial de Hidrocarburos afectando la ganancia de las petroleras en 200 millones de pesos anuales, como compensación especial por los daños ambientales, económicos y de salud [...] Triplicación de las regalías bajo control de los trabajadores, en el camino de la renacionalización de YPF bajo control de los trabajadores, sin indemnización. [...];
 - f) 10.000 planes de trabajo de 300 pesos como mínimo para el Departamento San Martín o inmediato subsidio a los desocupados por el mismo monto. Condonación de tasas e impuestos municipales y provinciales para todos los desocupados, tarifas subsidiadas de electricidad, gas y agua. Combustible subsidiado en todo el Departamento San Martín al igual que en el sur del país;
 - g) aumento de los presupuestos de salud y educación públicas. Gratuidad de las prestaciones de alta complejidad. Becas para todos bajo control de la comunidad educativa. [...].”
- (Oviedo, 2001: 167).

Durante febrero de 2001, la Coordinadora desplegó una intensa actividad. Una de sus acciones más destacadas fue la instalación, durante 23 días, de piquetes sobre las compañías petroleras y contratistas de servicios para lograr la incorporación de personal e imponerles el “convenio piquetero” –2,50 pesos la hora– a aquellas que aún no lo habían aceptado. Cuando se produjo el despliegue de la gendarmería, la movilización se radicalizó: los piqueteros rociaron con nafta dos camiones-cisterna amenazando con hacerlos estallar en la destilería. En ese contexto, los trabajadores de una de las petroleras –Astra Evangelista– muchos de los cuales habían obtenido sus puestos en el curso de luchas anteriores, pararon las actividades, se sumaron a la protesta y contribuyeron a frenar la orden de represión que había sido impartida. Así, las empresas debieron negociar con los piqueteros y ceder a parte de sus exigencias. Por otro lado, en ese período se organizó una movilización que terminó destituyendo al responsable local del gremio de la construcción, que se había abstenido de participar en el proceso de lucha. De este modo, las organizaciones de desocupados se reafirmaron como un actor ineludible para las empresas a la hora de incorporar personal y negociar salarios.

El movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi estaba en alza, en un contexto en el que la crisis económica y política a nivel nacional y provincial se aceleraba. En marzo de 2001 renunciaron dos ministros de economía,⁴⁸ y asumió Domingo Cavallo, que había ocupado ese cargo durante el mandato de Carlos Menem, y había sido señalado por el propio gobierno aliancista como uno de los principales responsables de la desocupación y el empobrecimiento de la población. En Salta, el gobernador Romero advertía con preocupación que “Los dirigentes políticos del departamento San Martín han sido borrados por los líderes piqueteros” (Ver Prensa Obrera, 11/4/2001 “‘Los dirigentes políticos...’”). Sin embargo, en abril surgieron diferencias internas en la Coordinadora, aparentemente en torno a la distribución de los puestos de trabajo obtenidos, lo que produjo un quiebre de la unidad. Eso no impidió que en el mes de mayo la Coordinadora volviese a funcionar de hecho, cuando los obreros que estaban construyendo el hospital de Mosconi –que habían conseguido ese trabajo a partir de la lucha

piquetera—, declararon una huelga exigiendo que entre en vigencia el convenio salarial de 2,50 pesos la hora.

El conflicto derivó en un nuevo corte de ruta, y en la movilización de los trabajadores desocupados de Mosconi, Tartagal, Pocitos, Embarcación y Aguaray, levantando los mismos puntos votados en el Congreso de diciembre. En ese marco, la justicia ordenó la captura de José Barraza y otros militantes del PO, que fueron detenidos y acusados de “sedición” y de ejercer la “democracia directa” en referencia a la resistencia a la represión y las Asambleas Populares realizadas en los cortes-puebladas de mayo y noviembre de 2000. El movimiento piquetero respondió convocando a un paro general en todo el Departamento, al tiempo que reforzaba el corte. Pero estaba en marcha un operativo represivo de gran escala. A los pocos días fue detenido Juan Nievas,⁴⁹ y se libraron órdenes de captura contra el resto de los dirigentes piqueteros.

La pueblada de junio de 2001

Después de casi tres semanas de corte, el 17 de junio —día del padre— la gendarmería atacó sorpresivamente a los piqueteros, que se replegaron fuera de la ruta y comenzaron a resistir con piedras y gomeras. El gobierno difundió en los medios que había piqueteros armados y francotiradores, para justificar la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas represivas.⁵⁰ En esa línea, se difundió una versión que hacía aparecer a los piqueteros como “subversivos”, reeditando el mismo léxico utilizado durante la década de 1970. El juez Abel Cornejo, que ordenó el operativo, declaró que los francotiradores “eran personas bien adiestradas, pertrechadas con armas de guerra y gran cantidad de municiones”; el obispo de la zona, Jorge Lugones, declaró que los piqueteros eran “sediciosos que están fuera de la ley”, y que “han buscado el camino de la lucha armada para lograr sus propósitos”; el gobernador de Salta también habló de “lucha armada”; el secretario de Seguridad del gobierno Nacional denunció la intervención de activistas “perfectamente entrenados”; y fuentes de inteligencia llegaron a sugerir conexiones con las FARC colombianas (Ver *El Tribuno*, 18/6/2001 “Trágica emboscada de francotiradores a gendarmes en Mosconi”; *Clarín*, 19/6/2001, “Distintas especulaciones sobre el fantasma de grupos armados” y “Mosconi está aislado y no cesan los enfrentamientos”; *Clarín*, 24/6/2001, “Francotiradores”).

En el marco de esa atmósfera, la gendarmería ingresó a Mosconi. En esa oportunidad, muchos pobladores fueron presa del miedo, pero una importante cantidad de habitantes de ese municipio y de Tartagal se solidarizaron con los manifestantes,⁵¹ concentrándose en la plaza principal, y obligando a la gendarmería a alejarse. A esa altura, con marchas y pronunciamientos en todo el país, el gobierno decidió dejar de lado la represión directa.⁵² A partir de ese momento, y hasta el mes de diciembre, quedó constituida la llamada “Plaza del Aguante”, a la que se acercaron luchadores políticos y sociales de todo el país. Allí, instalados en carpas y cercados por las tropas de gendarmería, residieron Pepino Fernández y otros referentes de la UTD. Una vez más, el poder local había sido desplazado por el movimiento de trabajadores desocupados. No sólo las fuerzas de seguridad debieron abstenerse de ejecutar las órdenes de detención de sus dirigentes, sino que el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Pablo Cafiero, viajó a Mosconi para reunirse con ellos. En ese contexto, el propio Cafiero admitió que “en Mosconi no hay Estado”. (*La Nación*, 24/6/2001). Sin embargo, la escalada represiva puso al movimiento a la defensiva, favoreció su aislamiento y le produjo un importante desgaste.

El reflujo

En julio y septiembre de 2001 se realizaron respectivamente la I y II Asambleas Nacionales Piqueteras y el movimiento se consolidó en la mayor parte del país, convirtiéndose en la principal fuerza de oposición al régimen. La UTD, centrada en Mosconi, no participó como organización en esos encuentros; la CTD intervino como parte del Polo Obrero. La emergencia del movimiento de

trabajadores desocupados como actor destacado a nivel nacional y su accionar coordinado constituyó un factor trascendente en el desarrollo de la crisis política que derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.⁵³ Para la misma época en Tartagal-Mosconi, a pesar de que las organizaciones siguieron llevando adelante sus proyectos y sus luchas, se iniciaba un progresivo reflujo de la influencia piquetera, que se extiende hasta la actualidad.⁵⁴ Así como esas localidades –y otras del interior– habían principiado el progresivo ascenso de masas a nivel nacional, se anticipaban ahora a su reflujo, permaneciendo prácticamente pasivas durante la caída de De la Rúa y la conformación de las Asambleas Populares en las principales ciudades del país.

Para explicar esa tendencia, contraria a la que se venía desarrollando desde 1997, resulta imprescindible tener en cuenta el accionar sostenido de los representantes del poder económico y político, que a pesar de verse completamente superados en varias oportunidades, nunca dejaron de trabajar en función de contrarrestar el inédito desafío que se les presentaba. Los medios de comunicación provinciales –en particular el diario *El Tribuno*, propiedad de la familia del gobernador Romero– y luego los nacionales, intervinieron de manera sistemática para intentar minar la legitimidad del movimiento piquetero.⁵⁵ Al mismo tiempo, ante la imposibilidad de frenar los piquetes, los poderes políticos locales y provincial optaron en varias ocasiones por alentarlos, colocando a sus propios agitadores o “comprando” dirigentes populares,⁵⁶ favoreciendo de este modo el desplazamiento del movimiento en su conjunto como factor de articulación contra-hegemónica. En esa línea, resulta significativo recordar que tras la pueblada de noviembre de 2000 se produjeron saqueos a locales comerciales en Tartagal. Distintos testimonios sugieren que esas acciones fueron alentadas por el poder político, con el objeto de dividir a la población y demonizar al movimiento piquetero: “[...] intentaron hacernos creer que los que asolaron nuestra comunidad eran desocupados reclamando trabajo. Pero nada más lejos de la verdad. Los trabajadores, aunque estén desocupados, no forman hordas despiadadas sin respeto por la vida ni la propiedad ajena, no abusan de niños, mujeres y ancianos ni saquean a sus vecinos” (Ernesto Katz, empresario local y principal damnificado por los saqueos de noviembre de 2000, en *El Tribuno*, 3/3/2005, “Emotiva reinauguración del Banco de la Nación”). La vigorosa campaña anti-piquetera desatada en junio de 2001 no resultó inocua, y alimentó esa perspectiva.

A partir del año 2002, en el marco de un contexto económico caracterizado por la virtual paralización de gran parte de las actividades económicas, comenzaron a producirse numerosos cortes de ruta, algunos de los cuales eran impulsados por pocas personas con escasa o ninguna representatividad, alentadas, en ocasiones, por el poder político. A diferencia de las luchas desarrolladas por la UTD, la CTD-PO y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta, esos grupos no hacían reclamos generales, sino muy puntuales, vinculados exclusivamente a sus necesidades. Además, algunos de ellos comenzaron a exigir un “peaje” a los que querían circular por la ruta.⁵⁷ La falta de coordinación entre las organizaciones dificultó aún más la situación, atomizando la representación piquetera.⁵⁸ Así, mientras los piqueteros aparecían como un todo, actuaban con orientaciones y criterios disímiles. En uno de los múltiples cortes que se produjeron en el 2002, y a partir del sistemático hostigamiento por parte de los servicios de seguridad, se decidió impedirle el paso a una ambulancia,⁵⁹ lo que derivó en la muerte de un paciente. Ante los ojos de una parte de la población, el responsable fue el método del corte de ruta y movimiento piquetero en general.

Finalmente, hacia noviembre del 2003 se produjo una dura represión contra un corte de ruta y accesos liderado por la UTD. Varios de sus dirigentes fueron apresados y golpeados por las fuerzas de seguridad, lo que motivó una importante reacción del movimiento piquetero y parte del resto de la población, que marcharon a exigir la libertad de los detenidos.⁶⁰ En el marco de esa protesta se produjo la quema de una de las sedes de la empresa hidrocarburífera Tecpetrol, ubicada sobre la ruta, cerca de la entrada a Mosconi. No se ha esclarecido quién impulsó esa acción,⁶¹ pero lo cierto es que desató una

importante campaña en los medios contra el movimiento piquetero, que era presentado como “vandálico”, y provocó el rechazo de una parte significativa de la población de Mosconi y Tartagal.⁶²

Los hechos mencionados, entre otros, favorecieron la disminución de la popularidad del corte de ruta como método y del propio movimiento piquetero. Sin embargo, sería un error pensar que la legitimidad del movimiento de trabajadores desocupados ante los ojos del conjunto de la población local ha sido afectada gravemente, como parece haber sucedido en otros lugares del país, al menos provisoriamente. En Tartagal y en Mosconi, no resulta sencillo divorciar al movimiento piquetero del resto de la sociedad, en función de los múltiples vínculos sociales existentes entre ambos. A su vez, la persistencia de la desocupación masiva y de la indigencia, junto al recuerdo de la etapa previa al avance neoliberal, inciden notablemente en el nivel de la conciencia de amplios sectores, que coinciden en señalar que la raíz de los cortes de ruta y del movimiento piquetero es la falta de trabajo y la miseria, demostrando un nivel de comprensión y tolerancia hacia el movimiento de piquetero ausente en otras regiones. Esta percepción aparece incluso a nivel del poder político local: “[...] el efecto digamos de cortar una ruta quien más la sufre, a quien más le impacta es al propio habitante de acá de la zona... o sea que desde ese punto de vista a nosotros nos genera muchas dificultades [...] pero eh... también no hay otro modo... aparentemente de... de protestar... manifestar por supuestas situaciones digamos... que la gente demanda... que no se le da respuesta el Estado nacional, el Estado provincial [...] actualmente la gente no encuentra otra forma de manifestarse [...] ¿no? Esto ha sido así [...] no tienen otra herramienta supuestamente para... para hacer escuchar sus reclamos... (Entrevista del autor a miembro del gabinete del municipio de Tartagal, junio de 2005).

El carácter complejo y contradictorio del reflujo en cuestión aparece, desde otro nivel de la realidad, si se atiende al resultado de los últimos comicios, de octubre de 2005. En ellos, el Partido Obrero, estrechamente vinculado al movimiento piquetero, logró la elección de Pepe Barraza como concejal por Tartagal, y en Mosconi, un cargo análogo con más del 20% de los votos.⁶³ Por otra parte, el elevado ausentismo registrado –alrededor de 46% en Tartagal, 36% en Mosconi y 47% en todo el Departamento San Martín– (Ministerio del Interior de la Nación, 2005) indica una importante crisis de legitimidad del sistema político. No obstante, actualmente, el movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi no es visualizado como un sector capaz de dirigir la lucha del conjunto social, como pareció insinuarse en su momento de auge. De producirse nuevamente, es de esperar que la coordinación entre sus principales organizaciones multiplique su capacidad de acción y le devuelva un papel de referencia, tanto a nivel local como a nivel nacional.

Bibliografía citada

Aguilar, María Ángela y Estela Vázquez 1998 “Flexibilización salvaje en la selva chaco-oranense. El caso de Orán y Tartagal (Salta), en *Realidad económica*, (Buenos Aires), N° 153.

— 2000 “De YPF a la ruta: un acercamiento a Tartagal”, en Panaia, Marta; Aparicio, Susana y Zurita, Carlos (eds.) *Trabajo y población en el Noroeste argentino*, (Buenos Aires: La Colmena).

Atschuler, Jerónimo 2001 “Norte de Salta, escuela de piqueteros”, Buenos Aires, mimeo, citado en Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003 *Entre la ruta y el barrio* (Buenos Aires: Biblos).

Auyero, Javier 2002a *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina* (Buenos Aires: Libros del Rojas, UBA).

— 2002b “La vida en un piquete. Biografía y protesta en el sur argentino”, en *Apuntes de investigación del CECyP* <<http://www.apuntes-cecyp.org/N8-Auyero.htm>, fecha en que se accedió a la web: 27/12/2004>.

Barbetta, Pablo y Lapegna, Pablo 2001 “Cuando la protesta toma forma: los cortes de ruta en el norte salteño” en *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social*. (Buenos Aires: Alianza).

Benclowicz, José Daniel 2004 “Democracia directa, autogestión y contrahegemonía en el norte argentino: elementos para el estudio del movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi”, en *Revista de la Escuela de Antropología*, (Rosario) Vol. IX.

Castel, Robert 1997 *La metamorfosis de la cuestión social*, Buenos Aires: Paidós.

Dinerstein, Ana Cecilia 2001 “El poder de lo irrealizado: el corte de ruta en la Argentina y el potencial subversivo de la mundialización” en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires) N°5.

Equipo de Educación Popular de la UPMPM 2003 *Cortando las rutas del petróleo* (Buenos Aires: Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo).

Farinetti, Marina 2003 “Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo: indagación sobre el significado de una rebelión popular”, en *Apuntes de investigación del CECyP* <<http://www.apuntes-cecyp.org/N6-Farinetti.htm>, fecha en que se accedió a la web: 27/12/2004>.

Ferrara, Francisco 2003 *Más allá del corte de rutas* (Buenos Aires: La rosa blindada).

Giarraca, Norma y Bidaseca, Karina 2001 “Introducción” en Giarraca, Norma (comp.) *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social* (Buenos Aires: Alianza).

Gómez, Elizabeth y Kindgard, Federico 2003 “Los cortes de ruta en la escala de luchas de los obreros jujeños” en *PIMSA* (Buenos Aires).

Gramsci, Antonio 2001 (1984) *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno* (Buenos Aires: Nueva Visión).

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia 2001a “La protesta en la Argentina”, en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires) N°4.

—— “Clase obrera y formas de lucha en la Argentina actual” 2001b en *Cuadernos del Sur*, (Buenos Aires) N°32.

Klachko, Paula 1999 “Cutral-Co y Plaza Huincul. El primer corte de ruta”, en *PIMSA* (Buenos Aires).

Kohan, Aníbal 2002 *¡A las calles! Una historia de los movimientos piqueteros y caceroleros de los 90 al 2002* (Buenos Aires: Colihue).

Korol, Claudia 2005 “Tiempo de guerra y emancipaciones en las tierras del petróleo. Análisis de la experiencia de la UTD de Mosconi”, mimeo

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal 1985 *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia* (Madrid: Siglo XXI).

Lapegna, Pablo 2000 “Actores heterogéneos y nuevas formas de protesta: los cortes de ruta de Tartagal-General Mosconi, Salta”, informe de beca Ubacyt, mimeo.

Lenguita, Paula 2001 “Los desafíos teóricos de la identidad piquetera”, <<http://www.ceil-piette.setcip.gov.ar/docpub/ponencias/lenguitapiq.html>, fecha en que se accedió a la web: 27/12/2004>

López Echagüe, Hernán 2002 *La política está en otra parte* (Buenos Aires: Norma).

Lucita, Eduardo 2001 “Cortando rutas, abriendo nuevos senderos. Desocupados, ocupados, ‘piqueteros’, viejas y nuevas formas de lucha”, en *Cuadernos del Sur* (Buenos Aires) N°32.

Maceira, Verónica y Spatalberg, Ricardo 2001 “Una aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera en la Argentina, en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires) N°5.

Masseti, Astor 2004 *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva* (Buenos Aires: Ed. De las Ciencias/FLACSO).

Mazzeo, Miguel 2004 *Piqueteros. Notas para una tipología* (Buenos Aires: FISyP/Manuel Suárez editor).

Ministerio del Interior de la Nación, Dirección Nacional electoral 2005 <http://www.elecciones2005.gov.ar/paginas/f_top.htm, fecha en que se accedió a la web: 26/10/2005>.

MTD Solano y Colectivo Situaciones 2002 *Hipótesis 891. Más allá de los piquetes* (Buenos Aires: De mano en mano).

Municipalidad de Mosconi 2005 “Plan de desarrollo local y economía social”, mimeo.

Municipalidad de Tartagal 2004 “Plan de desarrollo local y economía social”, mimeo.

Oviedo, Luis 2001 *Una historia del movimiento piquetero* (Buenos Aires: Rumbos).

Petras, James 2001 “Movimiento de trabajadores desocupados en Argentina” en *La Maza* (Buenos Aires) Suplemento especial Mosconi.

Sacchi, Paulo 2004 “La protesta social en el Norte Argentino. Los piqueteros de Mosconi UTD”, Tesis de Licenciatura en Sociología de la UNSE, mimeo.

Secretaría de Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2000 “Localidades de Tartagal y General Mosconi. Situación económica-social”, mimeo.

Scribano, Adrián 1999 “Argentina ‘cortada’: cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste” en López Maya, M. (ed.), *Lucha Popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste* (Buenos Aires: Nueva Sociedad).

Scribano Adrián y Schuster Federico 2001 “Protesta social en la Argentina de 2001: entre la normalidad y la ruptura”, en *Observatorio Social de América Latina* (Buenos Aires) N°5.

Schaumberg, Heike 2004 “Imaginario generacionales de lucha y trabajo en Gral. E. Mosconi, Salta”, ponencia presentada en las II Jornadas de Antropología Social (Inst de Cs. Antropológicas, FFyL, UBA), mimeo.

Schuster, Federico y Pereyra, Sebastián 2001 “La protesta social en la Argentina democrática” en Giarraca, Norma (comp.), *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social* (Buenos Aires: Alianza)

Secretaría de Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2000 “Localidades de Tartagal y General Mosconi. Situación económica-social”, mimeo

Soldano, Daniela 2002 “Subjetividad y vida política” en *Apuntes de investigación del CECyP* <<http://www.apuntes-cecyp.org/N6-Soldano.htm>, fecha en que se accedió a la web: 27/12/2004>.

Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003 *Entre la ruta y el barrio* (Buenos Aires: Biblos).

Thompson, Edward Palmer 1989 *La formación de la clase obrera en Inglaterra* (Barcelona: Crítica).

——— 1995 “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII”, en *Costumbres en común* (Barcelona: Crítica).

Trotsky, León 1985 *Historia de la Revolución Rusa* (Madrid: Sarpe).

UTD 2003 “Informe de situación de General Mosconi, Departamento General San Martín”, mimeo.

* Historiador. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Becario de CLACSO.

¹ Localidades de la provincia de Neuquén, en las que se produjo el primer gran corte de ruta-pueblada del país, en 1996.

² Las mencionadas teorías fueron elaboradas en Europa y los Estados Unidos, donde se desarrollaron importantes luchas como la de los movimientos ecologista, feminista, pacifista, etc., que no responden a patrones clasistas.

³ Es el caso de Massetti (2004), que critica la denominación de “movimiento de trabajadores desocupados”, y postula la de “movimiento de pobres”.

⁴ Las cifras corresponden al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, realizado por el INDEC (Instituto nacional de Estadísticas y Censos).

⁵ A excepción del ferrocarril, vinculado a ambas actividades.

⁶ Distintos teóricos han desarrollado este problema. Laclau y Mouffe (1985) han distinguido entre las relaciones de “subordinación” donde un individuo está sometido a las decisiones de otro, de las de “opresión” que aparecen cuando el sujeto entiende tal subordinación como opresiva. Thompson (1995), como ya se mencionó, critica la “visión espasmódica de la historia popular” basada en la idea de que los sectores populares reaccionan mecánicamente ante un estímulo, en este caso la privación de las necesidades básicas.

⁷ El primer corte de ruta en la historia de la región parece haberse producido en 1985, en defensa de un proyecto para poner a funcionar una planta de fertilizantes de YPF. (Ver Schaumberg, 2004).

⁸ En octubre de 1991, el Partido Renovador de Salta se impuso en toda la provincia con un 56,1% de los votos, frente al 35,8% obtenido por el PJ (Fuente: Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral). Este hecho indica una crisis en las identificaciones políticas de la población, que favoreció la emergencia de nuevos referentes.

⁹ Los datos –citados en Barbeta y Lapegna (2001: 237)– corresponden a un informe de la Secretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS, 2000) y están calculados sobre la base del año 1995, es decir, después de la privatización de YPF.

¹⁰ Castel (1997), entre otros autores, ha enfatizado el papel integrador del trabajo en la “sociedad salarial”, y el consiguiente aislamiento relacional que se produce ante la carencia del mismo. Varios autores han abordado el problema del impacto subjetivo del desempleo masivo en la Argentina, el trabajo de Soldano (2002), resulta particularmente interesante para ampliar este punto.

¹¹ A partir del corte de 1996 en Cutral-Co y Plaza Huincul, se difundió el vocablo *piquetero*, que terminó utilizándose para identificar a los miembros de las organizaciones de desocupados. En ese momento, sin embargo, se designaba con ese nombre a todos los actores que permanecían en la ruta para garantizar los cortes, y no sólo a los desocupados en lucha.

¹² Tras el corte de 1996, muchas de las concesiones comprometidas por los gobiernos nacional y provincial fueron incumplidas, hecho que motivó el nuevo corte de 1997. Sin embargo, el incipiente movimiento surgido en esta zona fue finalmente cooptado por las instancias del poder local, y desactivado. Así, a pesar de las similitudes estructurales con las localidades de Tartagal y Mosconi, en este caso el proceso histórico siguió un curso diferente. El análisis de los motivos de ese hecho exceden las posibilidades y el propósito de este trabajo, pero resulta oportuno rescatar en este contexto el papel de los sujetos en la historia, y advertir la imposibilidad de predecir con certeza el devenir, resultante de la combinación de múltiples factores, algunos de ellos imprevisibles.

¹³ Pepe Barraza era activista sindical y fue militante del Partido Comunista; tras la protesta de 1997 se vinculó al Partido Obrero (Entrevista del autor a José Barraza, junio de 2005). Hay otros militantes que no son figuras públicas como las que mencionamos, y que formaron parte de la comisión negociadora de 1997. Decidimos no mencionar sus nombres por cuestiones de seguridad. De cualquier manera, consideramos que lo registrado hasta el momento es suficiente para mostrar la influencia de la izquierda en la organización y desarrollo de la protesta, así como la representatividad de sus dirigentes.

¹⁴ Barbeta y Lapegna afirman equivocadamente que en esta protesta “[...] no se presenta una movilización [...] con dirigentes que provengan de organizaciones estructuradas como partidos políticos o sindicatos” (2001: 239). Lo que sucede es que se trata de partidos políticos y dirigentes sindicales de izquierda que impugnan el orden social y político establecido, diferenciándose de este modo de los partidos o sindicatos tradicionales.

¹⁵ La dinámica que se desenvuelve es análoga a la que describe E. P. Thompson en *La formación de la clase obrera en Inglaterra* (1989), en el sentido de que es la capacidad de los propios trabajadores desocupados de percibir y articular sus intereses comunes la que los constituye como actor social.

¹⁶ Gramsci (2001) distingue tres grados en la conciencia política colectiva de los distintos sectores sociales. El primero tiene un carácter meramente corporativo: cada grupo profesional o fracción de clase se nuclea solidariamente, pero esa solidaridad no se extiende a otros sectores de la misma clase social. En el segundo la conciencia de la solidaridad de intereses se extiende a todos los miembros de una clase social en el terreno económico, y se plantea la lucha por la igualdad política con la clase dominante. El tercero tiene que ver con la capacidad hegemónica de cada grupo, es decir, de su capacidad de presentar sus intereses de clase como los intereses del conjunto de la sociedad. Por sus características, el movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi tiende a asumir los dos primeros grados simultáneamente.

¹⁷ Las localidades de Aguaray, Salvador Mazza y Cornejo, todas ubicadas sobre al borde de la ruta n° 34, se sumaron al corte. Según Oviedo (2001: 54) “Unos cien piquetes controlaban todos los accesos”.

¹⁸ Según Barbeta y Lapegna, “Ante el debilitamiento de las identidades ‘partidarias’ o ‘de clase’, se abre la posibilidad de definir una identidad con respecto a otros anclajes; en este caso específico, la comunidad de pertenencia” (2001: 242). En realidad, lo que parece haberse debilitado es la identidad peronista de los trabajadores, a raíz de la profunda crisis social provocada por las medidas implementadas por el gobierno ese signo político. La derrota del justicialismo en las elecciones provinciales de 1991 en Mosconi, a manos del Partido Renovador, la alternancia de ambos partidos en los poderes locales y el crecimiento de la influencia del Partido Obrero durante los últimos años son expresiones de esa transformación. Por su parte, la identidad de clase, como ya se sugirió, se manifestó durante toda la protesta con gran vitalidad.

¹⁹ Comerciantes y empresarios deudores del Banco Nación e Hipotecario nacional obtuvieron una amplia refinanciación; los sectores maderero y agropecuario obtuvieron créditos y tierras fiscales para la explotación. (*Clarín*, 15/5/1997).

²⁰ Los planes “Trabajar” del gobierno nacional, al igual que otros programas similares a nivel provincial, consistían hacia 1997 en el otorgamiento de una ayuda de aproximadamente 200 pesos a cambio de una contraprestación laboral (generalmente tareas de asistencia municipal o comunitaria).

²¹ Inicialmente, se ofrecieron 1.000 planes Trabajar y 1.000 subsidios de desempleo de 220 pesos cada uno, en el acuerdo firmado se establece el otorgamiento de 1.000 fondos de desempleo de 220 pesos por un año; 3.000 planes Trabajar por un año y 1.000 por seis meses, de 220 pesos; 1.400 puestos permanentes en petroleras privadas.

²² Esta última modalidad de lucha se generalizó hacia el año 2000; volveremos sobre este punto más adelante.

²³ Parte de estas luchas quedaron registradas en distintos artículos de *Prensa Obrera*, el periódico del Partido Obrero: 16/4/1998, “Salta: Crece la lucha contra la privatización en los hospitales”; 29/5/1998 Tartagal: A un año de la pueblada”; 17/12/1998, “Tartagal. Llamado a los docentes especiales”; 29/4/1999, “Tartagal. No firmar ninguna adhesión a la autogestión hospitalaria”; 11/6/99, “Salta: Carta abierta a los trabajadores municipales y a Fermín Hoyos (Secretario General de ATE)”; 10/9/1999 “Tartagal: Nuevamente se reunió la Asamblea Popular”.

²⁴ El aniversario del primer corte-pueblada funcionó en distintas oportunidades desde 1998 como fecha reivindicativa en Tartagal y Mosconi, en torno a la cual se organizaron varias marchas a la ruta.

²⁵ No se trataron simplemente de amenazas verbales: el 17 de diciembre el gobierno nacional ordenó la represión de otro corte, en la provincia de Corrientes, en el marco de la cual fueron asesinados dos manifestantes. El costo político de este hecho, la actitud decidida de los manifestantes del norte salteño, y el hecho de que tenían bajo su control un camión cisterna con combustible, (Ver *El Tribuno*, 18/12/1999, “La posición de gendarmería”) aparecen como las principales variables que explican la abstención del gobierno nacional a recurrir al uso de la fuerza.

²⁶ El carácter marcadamente obrero de la protesta no impidió la solidaridad de parte de los comerciantes, muchos de los cuales cerraron sus negocios a pedido de los manifestantes, lo que indica el ascendente conquistado en ese momento sobre otros sectores sociales.

²⁷ Seguimos en este punto a Gramsci (2001: 58): “El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la expansión del mismo grupo; pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías ‘nacionales’”.

²⁸ Tanto los referentes de la UTD como del Partido Obrero han insistido permanentemente sobre este punto.

²⁹ Al momento de triunfar en los comicios, en octubre de 1999, había 89.665 beneficiarios de los planes Trabajar en todo el país, para mayo de 2000, sólo quedaban 29.066 (Ver Svampa y Pereyra, 2003: 94).

³⁰ La oposición fue discursiva y efímera; poco después la ley de Flexibilidad Laboral fue votada por la mayoría de los diputados justicialistas. Más adelante, salió a la luz que el gobierno de Fernando de la Rúa había recurrido al pago de sobornos a varios legisladores para lograr la aprobación de la norma.

³¹ Ver también entrevista a mujer integrante de la comisión de desocupados formada en Tartagal luego del corte de 1999, en Lapegna, 2000: 34; y *El Tribuno*, 3 de mayo de 2000, “Corte de ruta a la altura de General Mosconi”.

³² Mientras tanto, otros sectores comenzaban a movilizarse a nivel nacional: el 5 de mayo se produjo un paro general impulsado por la CGT “rebelde”, Confederación General del Trabajo liderada por el dirigente del gremio de camioneros Hugo Moyano.

³³ El 9 de mayo, otro hecho contribuyó a abroquelar aún más a los manifestantes y la población y a elevar la tensión: en circunstancias muy dudosas, mueren dos piqueteros que habían ido en camioneta a buscar cubiertas para quemar en el piquete: Orlando Justiniano y Matías Gómez. Distintos indicios sugieren que fueron asesinados por la policía provincial.

³⁴ La figura del “Comité de Crisis” está prevista en la ley 24.059 de seguridad interior, para los casos en que “[...] se vean amenazados gravemente en el país o en una región determinada el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías o la plena vigencia de sus instituciones”.

³⁵ “Cacho” Javier, identificado como operador político del intendente de Tartagal y uno de los impulsores iniciales de la protesta, desapareció del corte algunas horas antes de la represión (Ver *El Tribuno*, 13/5/2000, “Juan Domingo ‘Cacho’ Javier ‘vocero’ de los piqueteros”; y *Prensa Obrera*, 25/5/2000, “Hablan los protagonistas”). Resulta evidente que a esa altura, el poder local era incapaz de desactivar la protesta que había contribuido inicialmente a organizar, y que ahora estaba fuera de su control.

³⁶ A pesar de no estar oficialmente autorizadas, se denunció la utilización de balas de plomo en la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Los heridos atendidos en los hospitales y los impactos que aún se pueden observar en distintas casas confirman la veracidad de la denuncia.

³⁷ En particular, se destaca el rol jugado por *Videotar*, el canal de cable local de Tartagal.

³⁸ Para una crónica detallada, ver *El Tribuno*, 13/5/2000, “Más de 20.000 tartagalenses restablecieron los piquetes”.

³⁹ Juan Carlos Romero, el gobernador de Salta, recurrió la figura del “infiltrado” para justificar la represión, anticipando de este modo al gobierno aliancista, que adoptó esa figura y otras de la jerga de la “lucha antisubversiva” poco tiempo después (Ver *Clarín*, 13/5/2000, “Hay piqueteros infiltrados”).

⁴⁰ Apenas ingresó a la empresa de energía, se encontró reclamando el cumplimiento del contrato colectivo, lo que le valió la aprobación de sus compañeros: “Yo ingresé en el año ‘88 en Agua y Energía, ingresé contratado por la municipalidad [...] una de las primeras cosas que hice fue reclamar el cumplimiento del contrato de trabajo que nos hizo la municipalidad,

donde decía que nos debían proveer ropa de trabajo y todas esas cosas que no nos proveía la empresa... Bueno, como éramos empleados del municipio fui a reclamarle al intendente [...] conseguí la orden de compra de equipamiento [...] esa acción que tuve me sirvió para que me eligieran delegado” (Entrevista del autor a Pepe Barraza, junio de 2005).

⁴¹ Hacia el año 2000, varias petroleras aplicaban el convenio de la UOCRA –el gremio de la construcción–, que era de 0,95 pesos la hora, significativamente inferior al petrolero, de 2,50 pesos la hora. La acción conjunta de los piqueteros de Mosconi, Tartagal y Pocitos logró imponer un convenio “piquetero” de 2,50 pesos para los trabajadores que fueron contratados a raíz de esa lucha.

⁴² Esta actividad resulta fundamental para combatir el dengue, enfermedad de carácter endémico en la zona.

⁴³ En el año 2002, el presidente Eduardo Duhalde impulsó la creación de los planes “Jefas y Jefes de Hogar”, que contemplan una asignación mensual de 150 pesos a cambio de una contraprestación laboral de 4 horas. La mayor parte de los planes vigentes en la actualidad pertenecen a ese programa.

⁴⁴ “P: ¿La CTD no tiene proyectos productivos? R: Prácticamente, salvo algunas excepciones, como el jabón... P: ¿Ustedes están en contra de los proyectos productivos? R: Eeh... Un proyecto en el que los compañeros se autoexploten, [...] tratando de que se tienda a construir y se haga una... una jerarquía vertical... de patrones y todo lo demás, y en el que inclusive los compañeros se sientan separados del resto de la clase obrera y unidos por su emprendimiento comercial sería una aventura que por ahí no nos conviene propiciar... si un grupo de compañeros está interesado en seguirla ¿ta?, porque tienen un proyecto que les interesa, ¿ta? se discute, se ve si es viable...” (Entrevista del autor a militante de la CTD y del Partido Obrero, junio de 2005).

⁴⁵ Schaumburg (2004: 10) señala acertadamente que “Hoy, el dilema para todos los proyectos es visible: no sólo dependen de mano de obra desvalorizada de los planes sino también de la ‘colaboración’ de las empresas transnacionales y de las élites políticas”.

⁴⁶ Se trata de Aníbal Verón, trabajador de la empresa Atahualpa de Tartagal. Su nombre ha sido levantado como símbolo por distintos movimientos de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires.

⁴⁷ Embarcación y Pocitos pertenecen al departamento General San Martín, en esas localidades, al igual que en Mosconi y Tartagal, surgieron organizaciones de desocupados, aunque de envergadura menor.

⁴⁸ Machinea y López Murphy, que permaneció apenas una semana en el cargo.

⁴⁹ En ese momento, Juan Nievas dirigía un agrupamiento de trabajadores desocupados de la CCC en Mosconi.

⁵⁰ No tardó mucho en revelarse el hecho de que los francotiradores pertenecían a la Gendarmería, cuyos disparos provocaron la muerte de dos jóvenes que no participaban inicialmente de la manifestación: Carlos Santillán y Oscar Barrios. En total, la represión ha provocado cinco muertes y heridas de gravedad a decenas de pobladores de la zona hasta la actualidad.

⁵¹ Los gendarmes que sufrieron heridas debieron ser trasladados al departamento vecino de Orán, porque los enfermeros del hospital de Tartagal se negaron a atenderlos. (Ver *Clarín*, 19/6/2001, “Ecos de un día violento”).

⁵² No obstante, según se denunció, los piqueteros que fueron detenidos durante los enfrentamientos sufrieron golpizas y torturas.

⁵³ A partir de la segunda mitad del 2001, el movimiento piquetero demostró en varias oportunidades su capacidad de paralizar el país, movilizando decenas de miles de trabajadores desocupados y cortando las principales vías de circulación.

⁵⁴ Esta percepción es compartida por los militantes de las agrupaciones piqueteras, la prensa local y la población en general, según se desprende de las entrevistas realizadas.

⁵⁵ Este tema excede las posibilidades de este trabajo, y merece una investigación específica.

⁵⁶ Como ya se mencionó, el corte de mayo de 2000 fue alentado inicialmente por los intendentes de Tartagal –con un operador compartiendo la dirección del corte– y Mosconi. Por otra parte, varias entrevistas realizadas por el autor revelan que la “compra” de dirigentes se constituyó en una práctica regular antes y después de ese momento.

⁵⁷ En distintas entrevistas, dirigentes de las ambas agrupaciones han identificado este tipo de accionar como uno de los principales elementos de desgaste de la imagen piquetera del 2002 a esta parte.

⁵⁸ Debido a diferencias entre sus integrantes, la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte de Salta no volvió a funcionar desde el año 2001. A partir de ese momento, surgieron en Tartagal nuevos agrupamientos, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) –liderado por “Tyson” Fernández y vinculado al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) de Raúl Castells–, que fue desplegando una actividad creciente. En Mosconi, en cambio, funcionó durante un tiempo el núcleo de la CCC liderado por Juan Nievas, pero actualmente la UTD es la única agrupación que sostiene una actividad sistemática.

⁵⁹ Estos vehículos fueron utilizados en otras oportunidades por los servicios de seguridad para filmar a los dirigentes de los cortes, e iniciarles procesos judiciales.

⁶⁰ Hacia noviembre del 2003, el movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi tenía 108 encausados, 6 procesados y 14 imputados por la Justicia federal y provincial (UTD, 2003: 18).

⁶¹ Referentes de la UTD sugieren que habrían actuado instigadores vinculados a la policía.

⁶² Después de esos acontecimientos hubo incluso marchas contra el accionar de los piqueteros, protagonizadas fundamentalmente por maestras. (La información proviene de entrevistas realizadas por el autor a referentes de la UTD).

⁶³ En Salta Capital el PO también logró muy buenos resultados electorales –más del 18% de los votos, 5 concejales, 2 diputados provinciales– lo que contrasta con el papel marginal desempeñado por ese partido y la izquierda en general en los principales distritos del país.